

**CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
91/2021.**

**PROMOVENTE: INSTITUTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DE OAXACA.**

**DEMANDADOS: PODERES LEGISLATIVO
Y EJECUTIVO, Y EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, TODOS DEL
ESTADO DE OAXACA.**

**VISTO BUENO
SR. MINISTRO**

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

Cotejó

SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO

COLABORÓ: YOLANDA TORRES SÁNCHEZ

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 91/2021, promovida por María Antonieta Velásquez Chagoya, quien se ostenta como Comisionada Presidenta del **Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca**, contra el Poder Legislativo, su Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, el Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno y el Director del Periódico Oficial, todos de dicha entidad federativa, en la que impugna el Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

1. **Presentación de la demanda.** El doce de julio de dos mil veintiuno, María Antonieta Velásquez Chagoya, quien se ostentó como Comisionada Presidenta del **Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca**, promovió controversia constitucional por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. **En la demanda señaló como demandados, así como actos impugnados los que a continuación se precisan:**

Entidad, Poder u Órgano demandado:

- Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.
- Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.
- Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
- Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Director del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.

Actos y omisión cuya invalidez se demanda:

- Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.

3. **Artículos constitucionales que se consideran vulnerados.** Artículos 1°, 6°, apartado A, fracciones I, II, III, IV, VI y VIII, párrafos primero, segundo, séptimo y décimo, 14, 16, 116, párrafos primero y segundo, fracción VIII, 73, fracción XXIX-S y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca; y 69 y 83 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.

4. Conceptos de invalidez. En su demanda, la promovente expuso en sus conceptos de invalidez lo siguiente:

Primero. Violación al debido procedimiento legislativo.

La promovente sostiene que el decreto 2473 por el que se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad, con fecha uno de junio del dos mil veintiuno, aprobado con fecha catorce de abril de dos mil veintiuno por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, se encuentra colmado de vicios en su proceso legislativo con base en lo siguiente:

1. Con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Morena, presentaron ante la Secretaría de Servicios Legislativos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
2. En sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veinte, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones al segundo año de ejercicio legal constitucional, se aprobó turnar para estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Estudios Constitucionales.
3. Mediante oficio número LXIV/A.L./COM.PERM./3995/2020, el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, remitió para su estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, presentada por las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA.
4. En la séptima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, se aprueba en positivo la reforma en comento estableciendo la integración del nuevo órgano con un total de siete comisionados, y del acta respectiva se desprende que la totalidad de las y los integrantes de la comisión votaron a favor, y estuvieron presentes en la sesión, sin embargo, el acta respectiva sólo está firmada por tres integrantes.
5. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se realizó la publicidad en primera lectura en la Gaceta Parlamentaria en el punto número 68.9 el dictamen de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. a)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, las fracciones IV y V, de los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

6. En la misma fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Diputada Elena Cuevas Hernández, Diputada integrante de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, presentó oficio ante el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual retira su firma del dictamen de la Comisión señalando que se trataba del punto 67.9 el dictamen de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto por el que se reforman los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, las fracciones IV y V, de los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dictamen que fue retirado del orden del día de la sesión respectiva.

7. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, presentó ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios para efectos de publicidad en primera lectura el dictamen de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Marcado con el número 53.8 a) Declaratoria de Publicidad en primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, las fracciones IV y V, de los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII, todos de apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Dictamen que aparece publicado con tres firmas correspondientes a la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Noé Doroteo Castillejos y Fabricio Emir Díaz Alcázar todos Diputados integrantes de la comisión dictaminadora.

8. Con fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, presentó ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios para efectos de publicidad en segunda lectura el dictamen de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte marcado con el número 64.5 de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, las fracciones IV y V, de los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mismo que no fue dictaminado al interior de la Comisión ya que no se advierte sesión de la comisión para aprobar el referido dictamen.

9. Con fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, la Diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, quien fuera Presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales al momento de la firma del Dictamen de referencia, solicitó el retiro de su firma al dictamen, y por consiguiente el retiro del dictamen del orden del día en segunda lectura, solicitud a la cual no recayó acuerdo o manifestación alguna.

10. En la gaceta parlamentaria, se descargó la versión electrónica del dictamen puesto a discusión, sin embargo, en distintas horas y momentos, el dictamen fue modificado de la siguiente manera:

Dictamen en donde aparecen tres firmas de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales. (DIP. DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS Y FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR).

Dictamen en donde aparecen cuatro firmas de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales (DIP. DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS, FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR Y ELENA CUEVAS HERNÁNDEZ).

Dictamen en donde aparecen cinco firmas de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales. (DIP. DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS, FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR, ELENA CUEVAS HERNÁNDEZ Y MARITZA ESCARLET VÁZQUEZ GUERRA).

Lo anterior, sin eliminarse, cancelarse o suprimir las firmas de la Diputada DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, Presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucional, quien al momento de que el dictamen fue subido a primera lectura y de la votación en el Pleno, ya no fungía como presidenta de la comisión dictaminadora y pese a ello se continuó con su firma en el dictamen, aunado a que no obra constancia que acredite que la comisión sesionó para aprobar el dictamen de referencia y para el treinta de septiembre de dos veinte, fecha en que el dictamen fue inscrito a primera lectura tampoco fungía como presidenta la mencionada diputada.

Así señala que de la síntesis narrada con anterioridad, se desprende que no se cumplió debida y cabalmente el procedimiento legislativo a que se refieren los textos legales transcritos anteriormente y más aún, si analizamos y comparamos el acto reclamado consistente en el decreto 2473 por el que se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad, con fecha uno de junio del dos mil veintiuno, no coincide con el dictamen pasado para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria celebrada el día catorce de abril de dos mil veintiuno y que se publicó en la Gaceta parlamentaria del Congreso del Estado de Oaxaca denominado "Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto y sexto, las fracciones IV y V, de los párrafos segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"; sin embargo, el decreto publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha uno de junio de dos mil veintiuno lo fue "decreto 2473 por el que se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo,

tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”.

Refiere que no se puede considerar tal diferencia como un error ortográfico y de redacción a que se refiere el artículo 34 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, puesto que lo que fue propuesto, discutido y aprobado fueron lineamientos legales distintos, que, si bien existe similitud con el contenido de la reforma, atenta contra el principio rector de escrito derecho que rige al órgano legislativo.

Segundo. Omisión de una norma transitoria.

Considera que el Decreto impugnado es violatorio de los derechos fundamentales, al no establecer por parte del constituyente local permanente dentro de los preceptos de esa reforma, disposición alguna que determine las condiciones en las que debería transitar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Refiere que se violan indirectamente derechos humanos reconocidos, por el impacto negativo de la reforma en el sistema normativo aplicable a nivel estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, al extinguir jurídicamente al órgano responsable de garantizar la observancia del artículo 6° de la Constitución General en el ámbito local, sin prever una continuidad institucional y procedimental por un plazo determinado ni la sustitución inmediata del ente o la subrogación en sus obligaciones, como alternativas de solución, afectando con ello tanto el ejercicio y protección de los derechos en la materia, como la continuación de los procedimientos iniciados.

Aduce que en el caso en particular se requería de establecer una norma de tránsito concreta y/o mecanismos específicos que determinaran la situación legal en que debía de quedar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca ante las reformas aprobadas por el Congreso local permanente.

Afirma que lo anterior es así por el hecho de establecer en los transitorios primero y segundo lo siguiente:

“PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.”.

En este sentido, el Decreto combatido resulta insuficiente porque genera inseguridad jurídica en la continuidad del quehacer administrativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Insiste en la necesidad de una norma transitoria específica que establezca la situación jurídica o el mecanismo mediante el cual debería de transitar de un organismo a otro, en salvaguarda del Instituto, porque con motivo de la reforma constitucional que se impugna, en ésta no se establece que únicamente se tiene como propósito cambiar la denominación del “Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” a “Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”; toda vez que se implementan otro tipo de cambios de entre los cuales se advierten, el aumento a la estructura orgánica del Instituto consistente en la adhesión en dos comisionados más al Consejo General, lo que con meridiana claridad afecta el presupuesto asignado al Instituto otorgado para el presente ejercicio fiscal y, el contexto hace llegar a la conclusión de decir que sólo se trata de un cambio de nombre es decir superficial y aparente, afectando de manera amplia, directa, real y jurídicamente relevante al instituto.

Advierte que la falta de estimación presupuestal de la reforma legislativa vulnera el principio del debido proceso en la expedición de leyes y/o reformas y más aún, conculca el desarrollo del ejercicio presupuestario para el pago de los salarios proyectados para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así entonces, los efectos deben de calificarse como ciertos e inmediatos, porque **si bien es cierto que la reforma aludida conserva la característica del nuevo órgano como autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica propia, con plena autonomía técnica, de gestión**, no menos cierto resulta ser que no se pronuncia sobre el ejercicio de su presupuesto en lo relativo a las percepciones personales tanto de los Comisionados como de los trabajadores, pues el legislador pretende que con el presupuesto asignado para este ejercicio se aumente la plantilla de Comisionados *per se* y la infraestructura de personal para ponerlas en funcionamiento, poniéndose en riesgo la estabilidad financiera del instituto.

Así considera, que no puede determinarse que el órgano que nace por conducto del Decreto impugnado sólo sustituye en nombre al actual instituto, pues resulta evidente que al nuevo Órgano se le asignan nuevas atribuciones y por otro lado su integración es de manera distinta al existente antes de la reforma, toda vez que en el vigente la integración del Consejo General es de tres comisionados con una temporalidad de cinco años en el cargo, a contrario sensu en el Órgano Garante de nueva creación se requiere de cinco comisionados.

Señala que otro de los datos objetivos se encuentra en el artículo segundo transitorio de la reforma impugnada porque en él, se le concede al Congreso del Estado la facultad para emitir una nueva “Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”, dentro del plazo de sesenta días naturales posterior a la publicación del Decreto de reforma constitucional.

Precisa que ese hecho patentiza la necesidad que había de establecer dentro del derecho transitorio las condiciones específicas en que debería de quedar el Instituto que en realidad se extingue, que sólo tenía personalidad jurídica propia, sino que derivado de su actuar en el mundo jurídico tiene personal a su cargo, por lo cual ante la incertidumbre que se genera con esa extinción, deja un vacío jurídico con respecto al periodo de sesenta días dentro del que se va a emitir una nueva Ley que regulará al Ente gubernamental ahora creado, periodo en el que el Estado de Oaxaca carecería de órgano garante y se materializará la violación de derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sostiene que tampoco se refirió acción alguna ni medida que deba ser tomada dejando una laguna legal, tanto para los comisionados y trabajadores del Instituto como para todos los gobernados, a partir del momento de la publicación y entrada en vigor del Decreto que se impugna, puesto que no refiere si los Comisionados integrantes del Consejo General del Instituto extinguido continuarán en funciones a partir de la publicación del mismo Decreto y hasta el cumplimiento de su periodo de designación, coartando sus responsabilidades como servidores públicos; así mismo, tampoco refiere cuál es el destino y tratamiento o pendiente de resolución a la entrada en vigor del Decreto, ya que no refiere si se continuará su sustanciación ante el organismo garante que establece el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, creado en los términos del Decreto que se impugna por su deficiente creación legislativa, hasta en tanto se expidiese la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y se integre de manera operativa el organismo garante que establece la citada reforma.

Refiere que el principio de progresividad se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos o marchas atrás injustificadas a los niveles de cumplimiento alcanzados, que la “regresividad” en la protección y garantía de derechos humanos, como lo constituye la publicación del decreto que se combate al no ser claro, pues no se dice nada respecto a los derechos adquiridos, como Comisionados integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca creado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto 1690, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el once de marzo de dos mil dieciséis, por lo que ante dichas omisiones se deja a los integrantes de ese Instituto en estado de indefensión.

Manifiesta que en ningún momento fueron tomados en cuenta al momento de llevar a cabo el supuesto ilegal y deficiente proceso legislativo que dio como resultado el Decreto impugnado.

Aduce que es función de los artículos transitorios determinar lo relativo a la entrada en vigor de una constitución y la derogación de la anterior, de ahí que se sostenga que, con los cambios acaecidos dentro de dicho Decreto, se ponga en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información.

Estima que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca es un órgano constitucional investido con autonomía presupuestal y de gestión, es decir, su creación y configuración se encuentran establecidas de manera directa en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y, por tanto, es un ente que cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera, además de que es el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de todas las personas, protege los datos personales y todas las demás funciones imparciales que coadyuvan en el cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático el Estado, por lo que, las funciones inherentes al mismo requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Refiere que, en consecuencia, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, es el órgano garante de los derechos fundamentales de acceso a la información pública de los ciudadanos y su existencia consolida la democracia en el Estado, preponderando la transparencia del ejercicio de la administración pública y la rendición de cuentas.

Concluye que el derecho de acceso a la información y su vinculación con los derechos sociales y de libertad de petición a través de mecanismos normativos que den certeza jurídica, necesitan una esfera de protección, es decir, que el Estado garantice el claro y transparente acceso a la información y su vinculación con los derechos sociales y de libertad de petición a través de mecanismos normativos que den certeza jurídica, necesitan una esfera de protección, es decir, que el Estado garantice el claro y transparente acceso a la información al ciudadano.

Por ello, -aduce- que el ejercicio efectivo de esos derechos sólo es posible en la medida en que las personas cuenten con un Órgano Garante que proporcione información relevante y que haga posible un verdadero ejercicio de ese derecho, lo que en el caso particular no ocurre con la publicación del supra citado Decreto, y que por un lado desaparece al actual Órgano Garante sin prever una sustitución gradual y por el otro es omiso en establecer la forma como se deberán cumplir las obligaciones a su cargo hasta en tanto el nuevo órgano garante entre en funciones dejando de esa forma un vacío legal que coarta el derecho fundamental de acceso a la información pública, ante la ausencia de mecanismos confiables establecidos de manera expresa por el legislador.

Tercero. Violación al gasto público.

Refiere que el Congreso del Estado a través de su Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, sin fundamento ni motivación alguna, impuso una carga económica al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca o el órgano que lo sustituya, lo que evidentemente constituye una invasión directa a su esfera de competencia constitucional.

Sostiene que en el caso concreto violó su autonomía presupuestaria, contenida en el artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vulnerando con ello, los principios rectores de división de poderes, control del ejercicio del gasto público, así como de certeza jurídica y legalidad, en lo relativo a la conculcación de la autonomía de otros poderes públicos, toda vez que va en contra del interés patrimonial y las funciones que derivado de su ejercicio tiene a su cargo el Organismo Público Autónomo denominado Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como el Ejecutivo del Estado; el primero respecto de la tutela del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° Constitucional y el segundo respecto a la facultad de la elaboración del presupuesto destinado a los entes del Estado; transgrediendo de igual forma las leyes y reglamentos bajo los cuales se enmarca el procedimiento específico para la aprobación de un decreto con impacto al gasto público.

Manifiesta que el primer párrafo del artículo 114, apartado C, de la Constitución Local, atiende a la creación del Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, es decir, marca el origen de su nacimiento en la vida jurídica, y pese a su denominación actual como: el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, lo cierto es, que independientemente de cómo se haya optado por denominarle post creación, cualquier organismo explícitamente mencionado en las constituciones que no forman parte de uno de los tres poderes tradicionales del Estado sería automáticamente un Organismo Constitucional Autónomo.

Refiere que con la reforma a los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, de las fracciones VI y V, del párrafo segundo y tercero de la fracción VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que materializó el Congreso Local, mediante la emisión del decreto se trastoca una de las esferas competenciales de éste adoptando como propia e irrogándose la capacidad de decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, atentando en consecuencia, contra el principio de autonomía del organismo público, por las siguientes razones:

a) El presupuesto se ejerce a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, para el desarrollo de sus funciones y su operatividad, es en primera instancia aprobado por el Congreso del Estado de Oaxaca, derivado de la presentación del presupuesto de egresos que queda a cargo del Ejecutivo del Estado.

b) Como resultado del proceso anterior, el presupuesto asignado y autorizado para el ejercicio de dos mil veintiuno al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, fue de \$28'212, 990.00 (veintiocho millones doscientos doce mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.), del cual se ha ejercido un total de \$14'399, 568.22 (catorce millones trescientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.), hasta el día en que se presenta este recurso, quedando únicamente por ejercer un aproximado de \$13'813,421.78 (trece millones ochocientos trece mil cuatrocientos veintiún pesos 78/100 M.N.).

c) Con la expedición de dicho decreto con el impacto al número de comisionados que integran el Instituto, tenemos que se hace uso de la facultad de decisión para el destino de un presupuesto aprobado para el ejercicio dos mil veintiuno, dado que el recurso para el pago de los dos nuevos comisionados necesariamente habrá de ser tomados del presupuesto aprobado, toda vez, existió una omisión y un vicio en el proceso legislativo de aprobación de la reforma de mérito para realizar una valoración del impacto presupuestario de la iniciativa, incumpléndose con el deber de establecer la fuente de ingresos que permitirá atender con precisión el gasto para el pago de sus emolumentos y del personal a su cargo, en clara contravención a normas legales y reglamentarias y en perjuicio de los intereses patrimoniales del instituto.

La legislatura actual expide entonces un Decreto, sin que a la fecha exista una aprobación de la ampliación presupuestal del Instituto. De ahí la afirmación de que con la eventual expedición y publicación del Decreto se ha materializado ya una invasión de poderes o competencias constitucionales, por cuanto a la aprobación y deliberación del ejercicio del presupuesto asignado para el ejercicio de dos mil veintiuno, toda vez que hecha la designación de los nuevos comisionados se generarán derechos a favor de éstos, quedando obligado legalmente el Instituto o el órgano que finalmente le sustituya a cubrir su pago, independientemente de si se observó o no la ampliación presupuestal.

Aunado a lo anterior aduce que, con la aprobación de la reforma al precepto impugnado, no sólo se irriga una atribución de un Órgano Constitucional Autónomo, sino que también se invade la esfera competencial de otro poder estatal con el mismo rango constitucional, en clara violación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que como hechos precisa prohíbe la fusión dos poderes en uno mismo.

Aduce que según lo dispuesto en los artículos 44 y 80, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es obligación del Gobernador presentar al Congreso a más tardar el diecisiete de noviembre de cada año, la iniciativa de la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con el contenido y los anexos que determine la Ley reglamentaria.

Sostiene, es facultad del Congreso Local que en el primer periodo de sesiones se destine de preferencia la discusión y resolución de los presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado de Oaxaca.

Señala que es claro que el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca tiene facultades para orientar el gasto público en los programas y proyectos que se contienen en la iniciativa del presupuesto de egresos, así también por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado, posee la facultad de realizar una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a consideración de la legislatura local, bajo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala todo el proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del

pleno de la legislatura local, deberá incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

Por tanto, aduce, el Congreso Local se instaure como un órgano de revisión y aprobación, mientras que es facultad del Ejecutivo Estatal ser el responsable de realizar el dictamen presupuestal y presentarlo para tales fines, por lo que al expedir el constituyente el Decreto aludido sin contar con el presupuesto de egresos emanado del Ejecutivo ni prever alguna disposición transitoria en ese sentido, se irriga implícitamente una facultad de otro poder soberano, invadiendo así su esfera de poderes.

Refiere que la falta de legalidad en la emisión del multicitado decreto de reforma, por cuanto a la inobservancia de prever la fuente de ingresos que permita atender la presión del gasto respectivo que genera la designación de dos nuevos comisionados, conlleva un detrimento hacia los intereses colectivos, toda vez que por lógica elemental, se refiere que dicho recurso tendrá que ser asignado en el ejercicio presupuestal respectivo conforme al ingreso que se tiene del erario público, pudiendo afectar además, otras esferas y derechos humanos básicos, como son: el derecho a la seguridad y estabilidad del empleo, así como el derecho de acceso a la información, pues ese recurso tendrá que tomarse y redireccionarse de algún rubro en particular que actualmente se contempla en el instituto, como lo son las partidas para el pago de prestaciones de los trabajadores que laboran actualmente en éste, así como una disminución en la adquisición de materiales e insumos para la operatividad del mismo, poniendo en riesgo la ejecución del fin constitucional otorgado.

Señala que el decreto aludido tiene como efectos que se imponga a dos comisionados más que integren el Pleno del Instituto lo que se traduce en un incremento de tres a cinco comisionados, atentando contra los principios de legalidad y certeza contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que carece de formalidades del procedimiento que exige y reviste la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en lo relativo al proceso legislativo en términos de las consideraciones siguientes:

Así manifiesta, que el artículo 16 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del pleno de la legislatura local deberá incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

En ese sentido, aduce que se puede observar que el multicitado decreto no se contempló en su exposición de motivos y/o considerandos legales, la estimación del impacto presupuestal, vulnerando con ello el principio de certeza y seguridad jurídica consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el artículo 16, ya que en el caso particular del Estado de Oaxaca, como parte del desarrollo del proceso legislativo, existe la exigencia marcada en la Constitución Local y en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de contemplar el impacto presupuestario relativo a las reformas legislativas que se planteen ante el Congreso del Estado.

Así sostiene que del Decreto impugnado se observa que los legisladores fueron omisos en realizar un análisis de “estimación de impacto presupuestario, lo que vulnera directamente al funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca o el órgano que lo sustituya, ya que afecta el gasto programado y destinado al desarrollado de sus actividades, máxime que el presupuesto que ejerce para el año que corre fue proyectado en la implementación de gasto corriente y ordinario y para actividades de promoción y seguimiento de las funciones del mismo.

Insiste en que la incorporación de dos nuevos comisionados, implicaría un despliegue de infraestructura y recursos humanos, los cuales no fueron proyectados para la anualidad que corre, situación que se traduce en una eventual insolvencia económica, por consecuencia en una parálisis en el funcionamiento del citado instituto y con la conculcación directa a las y los ciudadanos de su derecho humano de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, consagrado en el artículo 6° constitucional.

Precisa que la implementación del impacto presupuestario en las iniciativas de ley o de reforma que se sometan a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca, permite incluir en su dictamen una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto, por lo que al violar lo dispuesto en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Poder Legislativo local genera una incertidumbre financiera y una conculcación directa al principio de certeza y seguridad jurídica, mismo que están obligados a observar los distintos poderes del Estado Mexicano en sus distintos órdenes de gobierno, toda vez que dicho principio reviste la posibilidad de acceder jurídica y realmente al ejercicio de los derechos humanos, que en el caso concreto se traduce en la posibilidad del buen funcionamiento del Instituto en el Estado de Oaxaca, pues el bien que tutela es un derecho reconocido como un derecho fundamental por nuestra carta magna y como derecho humano por los tratados internacionales.

Aduce que en el caso concreto el Congreso del Estado de Oaxaca debió observar irrestrictamente todas las etapas del proceso legislativo tal y como están señaladas en su norma local, pues de lo contrario el acto deviene nulo al ser producto de un procedimiento viciado, cuya fundamentación y motivación como acto de autoridad carecen de las formalidades jurídicas requeridas, lo que se traduciría en un ejercicio discrecional de la facultad legislativa que prevé la constitución local y, con ello, en una violación sistemática que impactaría de forma negativa en el interés social y el derecho colectivo de las y los ciudadanos.

Manifiesta que el Decreto votado en el legislativo advierte diferentes inconvenientes que se hacen visibles desde el punto de vista presupuestario debido a que se afectan el ejercicio de un presupuesto vigente o bien la elaboración de presupuestos futuros. Cita que algunos, por ejemplo, no están relacionados con la planificación anual del gasto que existe en la entidad federativa, tanto del gobierno como sus dependencias y de los Órganos Constitucionales Autónomos y su contenido implicaría un incremento del gasto

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

público el cual al no ser cuantificable de manera precisa deriva de una afectación al ejercicio presupuestal inmediato.

Asimismo, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha determinado en un criterio jurisprudencial emanado de una de sus sentencias, que las reformas de ley que derivan de los poderes legislativos de los Estados, deben de observar cómo imperativo de Ley, el principio de “motivación legislativa”, situación que se traduce en la necesidad por parte de los órganos legislativos de establecer clara y precisamente el impacto que de dichas reformas tiene en la vida pública y el eventual beneficio y/o perjuicio de interés social. En dicho criterio adoptado por la Suprema Corte, se advierte que a la autoridad a la que hoy se acude debe de observar en determinados campos, como el económico y el de la organización administrativa del Estado, un control muy estricto sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos, pues en tal virtud se determina la afectación a un derecho humano y/o fundamental, como lo es el derecho a la información, en este caso.

Por otro lado, aduce que debe quedar establecido que el paquete presupuestal autorizado para un ejercicio fiscal de gobierno, en el que se comprenden las finanzas públicas para el funcionamiento de los órganos de la administración central, desconcentrada y de los Órganos Constitucionales Autónomos, constriñe su aplicación y ejecución sobre el año fiscal comprendido, es decir, del mes de enero en que se ejercita al mes de diciembre en su término, cuya protección debe realizarse constitucionalmente del mes de noviembre al mes de diciembre del año directo anterior, de modo que, el hecho de pretender modificar las finanzas del Estado y plantear la aplicación de recursos que originalmente no fueron comprendidos en el paquete presupuestal autorizado y publicado en el periódico oficial, produce una clara afectación en la opresión y funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos del Estado, como en el presente caso lo es concretamente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Concluye que la falta de estimación presupuestal de la reforma legislativa vulnera el principio del debido proceso en la expedición de leyes y/o reformas y más aún, conculca el desarrollo del ejercicio presupuestario proyectado para el año que corre en detrimento del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como de la actora pues los efectos que deben de calificarse con cierto e inmediatos porque bien la reforma aludida conserva la característica del nuevo órgano como autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica propia, con plena autonomía técnica, de gestión, pero no sobre el ejercicio de su presupuesto, pues el legislador pretende que con el presupuesto asignado para este ejercicio, se aumente la plantilla de Comisionados *per se* de trabajadores e infraestructura para ponerlas en funcionamiento poniéndose en riesgo la estabilidad financiera del Instituto y además la estabilidad laboral de sus integrantes.

Cuarto. Violación al diseño constitucional del artículo 6° constitucional.

Sostiene que el Decreto impugnado viola el diseño constitucional de los órganos garantes estatales del cumplimiento de sus obligaciones, previsto en

el artículo 6° de la Constitución General, toda vez que dota al nuevo órgano garante de forma infundada de competencia para “garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno”, lo cual incide negativamente en su funcionamiento especializado y en el desahogo de sus procedimientos, poniendo en inminente riesgo el cumplimiento de su finalidad constitucional.

Manifiesta que el fin último para el que fueron creados los órganos garantes en materia de transparencia fue el de tutelar el acceso a la información pública gubernamental garantizando así el derecho fundamental de acceso a la misma y no el de “garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno”, por lo que se sostiene que se ha incurrido en un exceso por parte del Legislador al poner cargas violatorias del artículo 6° constitucional en relación con los diversos 1, 3, 7, 16, 73, fracciones XXIX-S y T; 76, fracción XII; 89, fracción XIX; 116; y 122 de la Carta Magna de nuestro país.

Quinto. Incertidumbre e inseguridad jurídica por antinomia constitucional.

Sostiene que existe una antinomia pues mientras el artículo 114 extingue al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el diverso 120 lo contempla como órgano garante e integrante del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca a través de su titular lo cual se demostrará más adelante, lo cual representa un problema de eficacia y de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico constitucional del Estado de Oaxaca.

En efecto, precisa que mientras el Decreto 2473 extingue al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, órgano garante como actualmente existe, el Decreto 2495 en su reforma al artículo 120 constitucional, lo contempla expresamente en la integración del “Comité Coordinador” del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca” a través de su titular, así es evidente la oposición de mandatos entre un artículo y otro del cuerpo constitucional.

Refiere que no debe pasar inadvertido que el apartado Transitorio del Decreto 2495, se ordena: “SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan del presente Decreto”.

En este sentido, señala que obedecer a tal mandato resulta evidentemente confuso, ya que la reforma tanto al artículo 114 como al 120 constitucionales, gozan de igual jerarquía dentro de la Constitución del Estado de Oaxaca.

Advierte que surge una falta de certidumbre y seguridad jurídica con respecto a la subsunción del nuevo artículo 114, a la reforma del diverso 120, en el sentido de quedar abrogada dicha reforma por acción del mandato expreso transitorio SEGUNDO del Decreto 2495.

Insiste en que surge la incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de si el nuevo apartado C del artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca

habría sido derogado por el Decreto 2495 que reforma la fracción LXIX del artículo 59 así como fracciones I y II, el inciso e) de la fracción III y los párrafos segundo y tercero del artículo 120 de la misma Constitución, publicado el primero de junio de dos mil veintiuno, en cuanto que en la fracción I del artículo 120 establece que el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción estará integrado, entre otros, por el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, estableciéndose en el artículo SEGUNDO transitorio que se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan a dicho decreto.

Aduce que esto es así porque al extinguirse el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, como actualmente existe y crearse el diverso Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, además con una estructura lógica diferente, se contrapone a lo mandado por la reforma al artículo 120, en el sentido de que al ser un ente diverso, no se estipula que forme parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, ni que lo haga a través de la integración del Comité Coordinador por conducto de su titular, creando otro vacío más en la normatividad estatal en materia de transparencia, combate a la corrupción y acceso a la información pública gubernamental, por tanto, al obedecer el SEGUNDO Transitorio del Decreto 2495, quedaría abrogada la reforma del artículo 114 constitucional en su apartado C, devolviendo el artículo 114 al estado en que se encontraba antes de la misma, esto necesariamente tendría que ser así, ya que hasta antes de la reforma se encontraría vigente el actual Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, generándose así la concordancia Constitucional que debe imperar en el sistema normativo y jurídico del Estado de Oaxaca.

Aunado a lo anterior señala que no debe pasar inadvertido que existe una antinomia entre el artículo 114, inciso C, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y el diverso 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, que crea discordancia tanto para el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como para la ciudadanía Oaxaqueña, por violación al artículo 6° constitucional por cuanto hace al derecho fundamental de acceso a la información.

Sexto. Ilegal publicación en el Extra Periódico Oficial.

Impugna del Director del Periódico Oficial Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca la publicación que hizo del decreto número 2473 mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo, las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial de fecha uno de junio del año de dos mil veintiuno, esto como vicio propio, pues no cumple dicha publicación con los mandamientos y requisitos

exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en sus artículos 53, fracciones I y II, 58, 80 y 84.

Refiere que en la publicación de fecha martes de uno de junio de dos mil veintiuno, no se cumplimentó con las disposiciones constitucionales citadas, puesto que, si bien aparece después del nombre del titular del ejecutivo estatal, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rúbrica- El Secretario General de Gobierno Ing. Francisco Javier García López.- Rúbrica; también lo es que este órgano oficial de publicación carece de fe pública para determinar jurídica y constitucionalmente que efectivamente aparece la firma tanto del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, acto que contraviene las disposiciones transcritas para culminar un debido proceso legislativo.

Aduce que el mismo artículo 84 de nuestra máxima Ley Estatal impone una sanción a la falta de firma del titular del ejecutivo o de los titulares de las dependencias involucradas en cada caso y esto es que no surte efecto legal alguno.

En conclusión, señala que se violan los derechos constitucionales por la inobservancia de los artículos 53, fracciones II y III, 58, 80, fracción IX y 84 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, relativos a la promulgación, refrendo y publicación inmediata del Decreto, en cuanto:

- a) Se apartó de la forma solemne establecida en el artículo 58;
- b) El decreto no firmado por los titulares de todas las dependencias involucradas, como prevé el artículo 84, que no hace distinción respecto de los decretos promulgatorios, por lo que ante la falta de este requisito de validez (refrendo) no puede surtir efectos legales de acuerdo con ese mismo numeral;
- c) No se ordenó su publicación inmediata, y
- d) No se satisficieron entonces los requisitos para la validez del Decreto, previstos en la referida norma constitucional.

Séptimo. Omisión de norma transitoria.

En su séptimo concepto de invalidez la promovente insiste en que es violatorio de los derechos fundamentales de los trabajadores el decreto número 2473 emitido por la Sexagésimo Cuarta Legislatura, mediante el cual se reforma el apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo, fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, porque no se estableció por parte del constituyente local permanente dentro de los preceptos de esa reforma, disposición alguna que determine las condiciones en las que deberían de quedar los trabajadores actualmente adscritos al Instituto de Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Considera que en el caso en particular se requería establecer una norma de tránsito concreta específica que determinará la situación legal en que debía quedar la parte actora ante las reformas aprobadas por el Congreso Local

permanente, ello, derivado de lo establecido en los transitorios primero y segundo.

Asegura que el Decreto combatido resulta insuficiente porque genera inseguridad jurídica en la estabilidad laboral de los integrantes del Instituto y con ello se compromete su funcionamiento, sin que se justifiquen los actos de molestia.

Se insiste en la necesidad de una norma de tránsito específica que estableciera la situación jurídica en la que se debería de quedar, porque con motivo de la reforma constitucional que se impugna, si bien es cierto, se establece que únicamente tiene como propósito cambiar la denominación del “Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” a “Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”, sin embargo, la afirmación de que sólo se trata de un cambio de nombre es superficial y aparente.

Precisa, que un análisis objetivo conduce a determinar que el órgano que nace por conducto de Decreto impugnado sustituye al actual Instituto, afirmación que se sustenta en que al nuevo Órgano se le asignan nuevas atribuciones y por otro lado su integración es de manera distinta al existente antes de la reforma, toda vez que en el vigente la integración del Consejo General es de tres comisionados con una temporalidad de cinco años en el cargo, a contrario sensu en el Órgano Garante de nueva creación se requiere de cinco comisionados.

Refiere que otro de los datos objetivos lo encontramos en el artículo segundo transitorio de la reforma que se cuestiona, porque en él, se le concede al Congreso del Estado la facultad para emitir una nueva “Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca”, dentro del plazo de sesenta días naturales posterior a la publicación del Decreto de reforma constitucional.

Señala que ese hecho patentiza la necesidad que había de establecer dentro del derecho transitorio las condiciones específicas en que deberían de quedar, atendiendo a que el Instituto que en realidad se extingue, no sólo tenía personalidad jurídica propia, sino que derivado de su actuar en el mundo jurídico tiene personal a su cargo, como lo son los quejosos, por la cual ante la incertidumbre que se genera con esa extinción y el plazo aquél en que se va a emitir una nueva Ley que regulará al Ente gubernamental ahora creado, se materializan en su agravio la violación de derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que la violación al primero de los preceptos se materializa en tanto que la reforma los discrimina en relación con los demás trabajadores del Estado de Oaxaca, al ponerlos en una situación de desigualdad, toda vez que no les otorga certeza jurídica por cuanto hace a su estabilidad laboral.

Asegura que la violación al segundo y tercero de los dispositivos constitucionales invocados, se materializa porque se le priva de sus derechos sin que previamente hayan sido oídos y vencidos en juicio y sin que la causa legal del procedimiento esté fundada y motivada.

Refiere que la violación al último de los preceptos se materializa porque los actos de autoridad que reclama le afectan a su estabilidad laboral que tutela el artículo 123 constitucional.

Se duele que tampoco refirió acción alguna ni medida que deba ser tomada, dejando una laguna legal a partir del momento de la publicación y entrada en vigor del decreto que se impugna, puesto que no refiere si los trabajadores que integran el Instituto extinguido continuarán en funciones y cumpliendo sus responsabilidades como servidores públicos y cuál será el destino y tratamiento que se deberá dar a los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor del Decreto, ya que no refiere si se continuará su substanciación ante el Instituto extinguido o se sustanciarán ante el organismo garante creado en los términos del Decreto que se impugna una vez que inicie funciones en términos de la nueva ley que se expida, generando con ello una parálisis indebida en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 6° de la Constitución General, por su deficiente creación legislativa, hasta en tanto se expide la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y se integre de manera operativa el organismo garante que establece la reforma al inciso C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

Señala que no debe soslayarse que ante el vacío legal que se crea en el momento de la publicación del decreto, deben imperar en todo momento los principios pro persona, en el sentido de elegir qué norma aplicar a un determinado caso, ya que deberá elegir la que más le favorezca a la persona, en este caso los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, y de esta manera, dar certidumbre jurídica a los trabajadores sobre su derechohabencia y su responsabilidad como servidores públicos.

Considera que el Decreto impugnado viola el principio de progresividad al no ser claro y dejarlo en estado de indefensión.

Manifiesta que el derecho constitucional transitorio no obstante que trata de materias más generales, que afectan al interés colectivo que en caso particular se erige en el cuerpo de trabajadores del Instituto y que tienen que ver con el sistema normativo fundamental, está muy lejos de poseer la complejidad y multiplicidad de matices que se encuentran en el derecho transitorio ordinario. En aquel, por disposición de una autoridad soberana, se desconocen derechos adquiridos, se establecen excepciones al principio de no retroactividad, se crean o suprimen instituciones.

Al respecto, señala que las normas transitorias ordinarias no pueden llegar a ninguno de esos extremos, por lo que el legislador debe ser muy cuidadoso en

redactar tales principios y en determinar los momentos en que surtirán sus efectos, esto deberá suceder de manera oportuna en los artículos transitorios, los cuales en el caso en particular del decreto combatido no sucede y da lugar a una provisión defectuosa e ineficaz de regulación legislativa.

Aunado a ello aduce que se violan las garantías de legalidad y debido proceso el legislativo al realizar precariamente su trabajo, que al emitir el Decreto que por esta vía se combate omite en perjuicio de los particulares señalar en los artículos transitorios cual será el destino de la derechohabencia de los trabajadores, es decir, omite aclarar que pasara con sus sueldos, prestaciones y reconocimiento de antigüedad en el trabajo.

Sostiene que en ningún momento fueron tomados en cuenta al momento de llevar a cabo el ilegal y deficiente proceso legislativo que dio como resultado el Decreto que vulnera sus derechos humanos, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, puesto que en su parte transitoria no se contempló por el legislador si se transferían al organismo público autónomo creado o que pasaría con ellos, dejándolos en el limbo legal, violando así sus más elementales derechos humanos como son el derecho a la estabilidad en el trabajo, es función de los artículos transitorios al determinar lo relativo a la entrada en vigor de una constitución y la derogación de la anterior.

En ese sentido, insiste en que con la publicación del Decreto impugnado se desaparece por un lado al actual Órgano Garante, sin especificar el destino de los trabajadores y la protección de la derechohabencia y por el otro es omiso de igual manera en establecer la forma en que los mismos deberán cumplir con sus obligaciones como servidores públicos hasta en tanto el nuevo órgano garante entre en funciones dejando un vacío legal que no sólo afecta a la parte actora, sino también el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante mecanismos confiables.

5. **Admisión y trámite.** El Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, ordenó formar y registrar el expediente bajo el número 91/2021, y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por conexidad con la acción de inconstitucionalidad 102/2021.
6. Por auto de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta, admitió a trámite la demanda con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia, se previno a la parte actora para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,

asimismo, se determinó que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud de recibir notificaciones a través del correo electrónico.

7. En otro orden de ideas, se tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Oaxaca; esta última autoridad en cuanto al refrendo del Decreto impugnado, sin perjuicio de lo que pueda decidirse en definitiva al dictarse sentencia respecto de la legitimación pasiva de la mencionada autoridad; más no así a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales ni al Director del Periódico Oficial de la entidad, ya que se trata de un órgano y dependencia subordinadas, respectivamente, a los poderes mencionados, los cuales deben comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto, se ordenó el emplazamiento de los demandados para que presentaran su contestación y que al hacerlo señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de lo contrario, las subsecuentes se harían por lista hasta en tanto cumplan con lo indicado y además, se le requirió al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado.
8. Además, se requirió al Poder Ejecutivo de la entidad para que enviara un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado el decreto controvertido en este medio de control constitucional, bajo apercibimiento de multa.
9. Aunado a lo anterior, en dicho auto se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.
10. Finalmente, en cuanto a la solicitud de suspensión formulada por el promovente, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

11. **Contestación de la demanda de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca.** Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el dos de septiembre de dos mil veintiuno, el Subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda entablada en su contra.
12. Por acuerdo de tres de septiembre siguiente, el Ministro instructor tuvo a la citada demandada, dando contestación de la demanda y con copia simple de la misma se ordenó dar vista al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.
13. En su contestación, dicha Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca hizo valer lo siguiente:
 - Manifestó que es cierto el acto únicamente respecto del refrendo a la promulgación del Decreto 2473 impugnado, en virtud de que se tienen atribuciones para ello, en términos de los artículos 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 34, fracciones XIX y XLII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 9, fracción XII, del Reglamento Interno de la propia Secretaría.
 - Respecto del capítulo de hechos que precisó el actor, señaló que por lo que atañe a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ni los afirma ni los niega por no ser actos propios de esa Secretaría.
 - Finalmente precisó que el refrendo que esa Secretaría realizó al Decreto 2473, fue en base a las atribuciones conferidas por los artículos 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 34, fracciones XIX y XLII, del Reglamento Interno de la propia Secretaría, situación que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que solicitó el sobreseimiento de la controversia en términos de los artículos 19, fracción VIII, y 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el ocho de septiembre de dos mil veintiuno y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, Fredie Delfín Avendaño quien se ostentó como Presidente de la Junta de Coordinación del Congreso del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo de la entidad.

15. Por acuerdo de veintisiete de septiembre siguiente, el Ministro instructor tuvo al mencionado Congreso del Estado, dando contestación de la demanda, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento de catorce de julio de dos mil veintiuno, al remitir copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y con copia simple de la contestación de demanda se ordenó dar vista al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.
16. En su contestación de demanda el citado Poder Legislativo hizo valer lo siguiente:
 - Sostuvo que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de advertirse un caso de litispendencia, al existir un diverso juicio de amparo indirecto 687/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, pendiente de resolver, en el cual resulta quejosa la Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, representante legal de la actora en la presente controversia.
 - Aduce que de igual manera se actualiza la improcedencia de la controversia constitucional, al no ser la vía idónea para impugnar una norma general como la reforma del artículo 114, apartado C, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que la citada disposición legal regula aspectos relacionados con el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, por tanto en su caso el organismo promovente debió recurrir la reforma referida mediante acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo que establece el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Así, señala que resulta manifiesta y notoria la improcedencia de la controversia constitucional con arreglo a lo dispuesto por el artículo 19, fracciones III y VIII, en relación con el diverso 1°, de la Ley Reglamentaria de la Materia, y el 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que solicita el sobreseimiento en la controversia.
- Por lo que se refiere al párrafo de la demanda en la que se indica la norma general cuya invalidez se reclama, sostiene que es cierto que su representado emitió el Decreto número 2473 impugnado, no obstante, lo que no es cierto es que la citada reforma contravenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- En relación con el párrafo en el que se menciona como preceptos del parámetro de regularidad constitucional que se estiman violados, señala que no es cierto.
- Respecto al párrafo que el promovente denomina hechos, sostiene que es cierto lo que manifiesta la actora en los párrafos 1, 2, y 3; que por lo que respecto a los manifestado en el párrafo 4, 5, y 6, suponiendo sin conceder que sea cierto lo que manifiesta la actora en dichos párrafos, no trasciende a la validez del Decreto 2473.
- Precisa que en lo que refiere la promovente en los párrafos 7 y 8, no es cierto que exista dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, firmado por tres diputados integrantes de la referida Comisión Permanente. Lo cierto es que la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales emitió dictamen de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, firmado por la totalidad de los diputados integrantes (5 diputados), lo que se acredita con la copia certificada del dictamen citado que se adjunta.
- Manifiesta, que en relación a lo precisado por la actora en los párrafos 9 y 10, expone que, suponiendo sin conceder, que sea cierto lo que indica, dichos eventos no trascienden a la validez del Decreto 2473, tomando en cuenta que lo cierto es que el antecedente legislativo del decreto en cita lo constituye principalmente el dictamen de fecha veintidós de septiembre de

dos mil veinte que como ya se precisó fue firmado por los cinco diputados integrantes de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales.

- Refiere que, respecto al párrafo de conceptos de invalidez formulados por la promovente que tienen como fin combatir supuestos vicios que infundadamente refiere la actora por lo que hace al proceso legislativo que dio origen al Decreto que se impugna, suponiendo sin conceder que no se hayan verificado diversos formalismo en dicho proceso, lo anterior no trascienda a la validez del Decreto número 2473, al haberse aprobado por mayoría calificada consistente en veintiocho votos a favor, lo que se acredita con la documental inherente a la copia certificada del acta de sesión ordinaria de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, parte relativa a la aprobación del referido Decreto.

- Por otra parte, manifiesta que la reforma al artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se emite en consonancia con lo que determina el numeral 6° constitucional, en virtud que con la citada reforma se garantizan ampliamente los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de los habitantes de Oaxaca, tomando en cuenta que con la creación de un nuevo órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, resulta incuestionable que se responde a las exigencias de la sociedad garantizando el derecho humano amplio relacionado con el acceso a la información, protección de datos personales y debida observancia de las normas de buen gobierno, lo anterior es así, de conformidad a la finalidad de la iniciativa que dio origen a la reforma referida, como se advierte del texto relativo a la exposición de motivos.

- Considera que asiste al Congreso de Estado de Oaxaca la libertad configurativa legislativa, para realizar la reforma del artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de conformidad a lo que dispone el diverso 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Además, precisa que su representado al expedir la reforma referida cumple con el parámetro de motivación reforzada, como se desprende de la lectura integral del Dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte.

17. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el once de septiembre de dos mil veintiuno y recibido en la Oficina de Certificación Judicial

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

y Correspondencia de este Alto Tribunal el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, José Octavio Tinajero Zenil quien se ostentó como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo de la entidad.

18. Por acuerdo de cinco de octubre siguiente, el Ministro instructor tuvo al citado Poder Ejecutivo del Estado, dando contestación de la demanda, se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento de catorce de julio de dos mil veintiuno, al remitir el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en que se publicó el decreto impugnado y con copia simple de la misma se ordenó dar vista al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de manifestar lo que a su representación conviniera.
19. Asimismo, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
20. En su contestación, el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca hizo valer lo siguiente:
 - Considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 - Aduce que una controversia constitucional resulta improcedente cuando los actos reclamados no existan, es decir, cuando no tengan consecuencias jurídicas en los términos planteados por el promovente; así aduce que se actualiza dicha causal de improcedencia, en razón de que, como se acredita con la documental que para tal efecto exhibe, los actos reclamados al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contrario a lo manifestado por la parte actora reviste el carácter de constitucionales, lo cual se corrobora con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
 - Aunado a ello considera que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la actora promovió demanda de amparo

contra el proceso legislativo, respecto de la emisión del Decreto 2473, mediante el cual se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C, del artículo 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual culminó con la promulgación y publicación de dicho Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el día primero de junio de dos mil veintiuno.

- Manifiesta que el juicio de amparo promovido por la parte actora fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Estado de Oaxaca, bajo el número 687/2021, en el cual se señaló como autoridades responsables a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de quienes se reclaman de manera medular la discusión, aprobación y expedición el Decreto en cuestión por la citada legislatura; la promulgación y envío para su publicación en el Periódico Oficial, por parte del Gobernador del Estado de Oaxaca; así como su aplicación, efectos y todas sus consecuencias, existiendo identidad de partes, de normas generales o actos y de conceptos de invalidez.

- Por lo que hace a los conceptos de invalidez, manifestó que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, cumplió con el mandato constitucional al promulgar y publicar el Decreto 2473, mediante el cual se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día uno de junio de dos mil veintiuno, lo anterior, acorde a lo establecido en los artículos 52, 53, fracción II y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que contrario a lo manifestado por la parte actora los actos reclamados están revestidos de constitucionalidad.

21. **Opinión del Fiscal General de la República.** El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

22. **Amicus curiae.** El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, Juan Carlos Pérez Góngora, en su carácter de representante legal de

MEXICOJUSTO.ORG, A.C., presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito de *amicus curiae* en el que solicitó que fuera considerada una opinión consultiva que adjunta y que aduce influirá positivamente en la resolución de la presente controversia.

23. **Cierre de la instrucción.** Substantiado el procedimiento, el seis de diciembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,¹ se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
24. **Radicación.** En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución.

CONSIDERANDOS

I. COMPETENCIA.

25. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Federal;² y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,³ en

¹ “**Artículo 29.** Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o la reconvención, el ministro instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes. El ministro instructor podrá ampliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite”.

² **Artículo 105.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

....

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

...

³ “**Artículo 10.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

relación con el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Instituto actor, y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Oaxaca, en la que se hace necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS.

26. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia⁴, procede ahora determinar los actos impugnados respecto de los que versa la impugnación en la presente controversia constitucional.
27. De la lectura integral de la demanda se advierte que el entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca impugna el siguiente acto:
- Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.
28. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera necesario precisar el contenido de las normas impugnadas:

“DECRETO NÚMERO 2473, MEDIANTE EL CUAL REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO; LAS FRACCIONES IV, V Y VIII, TODOS DEL

”

⁴ “**Artículo 41.** Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;[...]”

APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL EXTRA PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

DECRETO No. 2473

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

DECRETA:

“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primer, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo y; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para quedar como sigue:

Artículo 114.-...

A...

B...

C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

*El **Órgano Garante** de Acceso a la Información Pública, **Transparencia**, Protección de Datos Personales y **Buen Gobierno** del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, **independiente**, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable **de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio** de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y **garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno**, en los términos que establezca la ley.*

*Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, **independencia**, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, **buena fe**, **no discriminación**, **oportunidad y buen gobierno**.*

*Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y **cuatro** Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. **La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.***

...

Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración

alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, **observando en todo momento el principio de austeridad.**

El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:

I. a la III.

IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

V. Las resoluciones del **Órgano Garante** son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.

VI. y VII. ...

VIII. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.

El **Órgano Garante** tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.

El **Órgano Garante** coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.

...

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.”

29. Por otra parte, es preciso señalar que no pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que el Instituto promovente impugnó el Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C, del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.
30. No obstante, posterior a la presentación de la demanda, mediante Decreto Número 2736, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se adicionó una fracción VII, recorriéndose las fracciones subsecuentes del párrafo sexto del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ahí que las fracciones impugnadas quedaron de la siguiente manera:

Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.	Decreto Número 2736, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca
“Artículo 114. [...] C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	“Artículo 114. [...] C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.</p>	<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.</p>
<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.</p>	<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.</p>
<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los</p>	<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los</p>

<p>principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.</p> <p>El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.</p> <p>(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos del</p>	<p>principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.</p> <p>El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.</p> <p>(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos del</p>
--	--

<p>Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como, de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal;</p> <p>II. Emitir criterios generales y lineamientos para la salvaguarda de los derechos consagrados en el artículo 3 de esta Constitución, de conformidad con la ley en la materia;</p> <p>III. Conocer, instruir y resolver en única instancia, las impugnaciones y acciones que se presenten contra las autoridades que nieguen o restrinjan el acceso a la información pública;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.</p>	<p>Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como, de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal;</p> <p>II. Emitir criterios generales y lineamientos para la salvaguarda de los derechos consagrados en el artículo 3 de esta Constitución, de conformidad con la ley en la materia;</p> <p>III. Conocer, instruir y resolver en única instancia, las impugnaciones y acciones que se presenten contra las autoridades que nieguen o restrinjan el acceso a la información pública;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.</p>
---	---

<p>VI. Promover entre los servidores públicos y la población en general la cultura de la transparencia y el acceso a la información, y</p> <p>SIN CORRELATIVO</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017)</p> <p>VII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>VIII. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en</p>	<p>VI. Promover entre los servidores públicos y la población en general la cultura de la transparencia y el acceso a la información, y</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 23 DE OCTUBRE DE 2021)</p> <p>VII. Preservar e incentivar las prácticas de transparencia comunitaria.</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017)</p> <p>VIII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IX. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en</p>
--	---

<p>materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el órgano garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.”</p>	<p>materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el órgano garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.”</p>
---	---

31. Como se desprende del cuadro anterior, con el Decreto publicado con posterioridad al Decreto hoy impugnado, las normas impugnadas no sufrieron cambio de sentido normativo, únicamente se modificó el número de la fracción VIII, por el número de fracción IX con el que se identifica, ello al haberse adicionado una fracción, por lo que, debe tenerse como impugnada esta última.

III. OPORTUNIDAD.

32. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
33. El artículo 21, fracción II,⁵ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la interposición de la demanda, será, tratándose de

⁵ “**Artículo 21.** El plazo para la interposición de la demanda será: [...].
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y [...]”.

normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

34. En el caso, el Decreto número 2473, mediante el cual se reforman los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C, del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fue publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, y por tanto, el plazo de treinta días para impugnarlo inició el **miércoles dos de junio de dos mil veintiuno** y concluyó el **martes trece de julio de esa misma anualidad**; de dicho plazo deben descontarse los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, así como tres, cuatro, diez y once de julio, todos de dos mil veintiuno, por tratarse de sábados y domingos.
35. Si la demanda de controversia constitucional fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **el lunes doce de julio de dos mil veintiuno**, se concluye que su presentación fue **oportuna**.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA.

36. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso k), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...)

k).- Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

(...)”.

37. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:

“Artículo 10. *Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:*

I.- Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;...”.

“Artículo 11. *El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [...]”.*

38. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un órgano constitucional autónomo de una entidad federativa y los Poderes Ejecutivo o Legislativo de esa entidad federativa, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
39. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por **Maria Antonieta Velásquez Chagoya**, Comisionada Presidenta del entonces Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, carácter que acreditó con la copia certificada del nombramiento de fecha uno de septiembre de dos mil dieciocho.
40. Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, emitió un acuerdo ACDO/CG/IAIP/053/2021, correspondiente a la sesión extraordinaria de trabajo de seis de julio de mil veintiuno, donde, instruye al representante legal de dicho Instituto para la presentación del escrito de la demanda de controversia constitucional, relativa a la impugnación del Decreto por el cual se

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en particular, en su artículo 114, apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; y las fracciones IV, V y VIII, publicadas en el Extra Periódico Oficial, el uno de junio de dos mil veintiuno, ante esta Suprema Corte.

41. Ahora bien, con base en las documentales que al efecto exhibe y en términos de los artículos 87, fracción II, inciso h) y 93, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca⁶ **se reconoce la representación que ostenta la referida funcionaria**, para promover a nombre del entonces Instituto Local, órgano que tiene legitimación para promover el presente juicio constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso k), constitucional. Ello aunado a que, durante el trámite de la controversia constitucional no se ofreció prueba en contrario.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA.

42. A continuación, se analizará la legitimación de las partes demandadas, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la presente controversia, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.
43. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca, tienen legitimación pasiva, pues conforme a los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,⁷ serán demandados en las controversias

⁶ “**Artículo 87.** El Instituto, además de las atribuciones a que se refiere el artículo 42 de la Ley General, en el ámbito de su competencia, ejercerá a través de su Consejo General, las facultades siguientes:

[...]

II. En materia normativa:

[...]

h) Promover controversias y acciones constitucionales locales en la materia, y

[...]”

“**Artículo 93.** La Presidencia del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente al instituto ante cualquier entidad pública o privada;[...]”.

⁷ “**Artículo 10.** Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: (...)

II. Como demandada o demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia; (...)

“**Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo

constitucionales las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

44. En representación del **Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca**, dio contestación a la demanda, **José Octavio Tinajero Zenil**, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, en su carácter de representante legal, que acredita con la copia certificada del nombramiento de quince de junio de dos mil diecisiete, expedida a su favor por **Alejandro Ismael Murat Hinojosa**, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.
45. Ahora bien, la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en los artículos 79, fracción V, 80, fracción IX y 98 Bis vigente al momento de la presentación de la demanda, disponía:

“Artículo 79. *Son facultades del gobernador:*
[...]

V. *Nombrar y remover en los términos del artículo 88 de esta Constitución a las o los titulares de la (sic) Secretarías, de la **Consejería Jurídica** y a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado, cuyas designaciones o destituciones no estén determinadas de otro modo por esta Constitución y las leyes que de ella deriven; dicha designación deberá garantizar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares; y, si ello no fuere posible porque el número de nombramientos a expedir sea impar, será lo más cercano al equilibrio numérico, aplicando el principio de alternancia.*
En la integración de los órganos autónomos se observara el mismo principio.
[...]

“Artículo 80. *Son obligaciones de la gobernadora o el gobernador:*
[...]

IX. *Promulgar sin demora, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, decretos y acuerdos de la Legislatura del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;*
[...]

caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [...]”.

Artículo 98 Bis. La función de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo que para tal efecto establezca la ley, **ejerciendo la representación jurídica** del Estado, **del Titular del Poder Ejecutivo** y de la Gubernatura, en los términos que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como otorgar apoyo técnico jurídico en forma permanente y directa al Gobernador del Estado. Como titular de la dependencia, estará una persona que se denominará Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien para su nombramiento deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley.”

46. El artículo 49, párrafo primero, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, establece que:

“Artículo 49. La Consejería Jurídica prevista en el artículo 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, estará a cargo del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, quien dependerá directamente del Ejecutivo Estatal y quien ejerce la representación jurídica del Estado, del Titular del Poder Ejecutivo y de la Gubernatura, así como otorgar el apoyo técnico jurídico en forma permanente y directa al Gobernador del Estado.

A la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Representar legalmente al Estado de Oaxaca, al titular del Poder Ejecutivo y a la Gubernatura en todo juicio, proceso o procedimiento en que sean parte. Esta representación tendrá los efectos de mandato judicial y se entiende conferida sin perjuicio de que, en su caso, el Gobernador del Estado asuma por sí mismo la intervención que en dichos actos le corresponde;

[...]

VI. Representar al Ejecutivo del Estado y promover en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que éste sea parte; [...].”

47. En consecuencia, **José Octavio Tinajero Zenil** tiene la facultad para **representar al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca** en la presente controversia, por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.
48. Por su parte, en representación del **Poder Legislativo del Estado de Oaxaca**, dio contestación a la demanda el Diputado Fredie Delfín Avedaño, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, carácter que acredita con el Acta de Sesión Ordinaria, celebrada el siete de abril de dos mil

veintiuno, en la que protestó el cargo como Presidente de la Junta de Coordinación Política.

49. Aunado a que el artículo 49, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca⁸ prevé que corresponde a la Junta de Coordinación Jurídica Política representar legalmente al Congreso del Estado, así se reconoce que el Poder Legislativo cuenta con legitimación pasiva para comparecer en la presente controversia.

50. Por otra parte, comparece **Juan Enrique Lira Vásquez**, Subsecretario Jurídico y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, en su carácter de representante legal de la **Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca**, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento expedido de uno de enero de dos mil veintiuno. Su facultad de representación encuentra sustento en los artículos 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca,⁹ y 47, fracción I, del Reglamento Interno de esa Secretaría.¹⁰
51. La citada Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, cuenta con legitimación pasiva para comparecer en la presente controversia, pues, en el caso conforme al artículo 34, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder del Ejecutivo del Estado,¹¹ le corresponde a la mencionada Secretaría refrendar

⁸ “**Artículo 49.** Son atribuciones de la Presidencia de la Jucopo:

[...]

III. Tener la representación Legal del Congreso y delegarla en la persona o personas que considere oportuno;[...].”

⁹ “**Artículo 85.** Para auxiliar en sus funciones a los Secretarios y sustituirlos en sus faltas temporales, habrá en cada Dependencia los Subsecretarios que determinen (sic) la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.”

¹⁰ “**Artículo 47.** La Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos contará con una Subsecretaría o Subsecretario, quien dependerá directamente de la Secretaría o Secretario y tendrá las siguientes facultades:

I. Representar legalmente a la Secretaria o Secretario y realizar la defensa jurídica de la Secretaria en todo juicio, proceso o procedimiento en que sea parte o ante cualquier autoridad;

[...]”

¹¹ “**Artículo 34.** A la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[...]

XXVIII. Refrendar con su firma las leyes o decretos enviados para su promulgación y publicación por el Congreso del Estado, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expide el Gobernador del Estado y aquellas que deban de regir en la entidad y establezca la normatividad aplicable en la materia, remitiéndolos inmediatamente a la consejería jurídica del gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;[...].”

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

con su firma las leyes o decretos enviados para su promulgación y publicación por el Congreso del Estado, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expide el Gobernador del Estado y aquellas que deban de regir en la entidad y establezca la normatividad aplicable en la materia, remitiéndolos inmediatamente a la consejería jurídica del gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

52. En efecto, tal como se concluyó por el Tribunal Pleno al resolver la Controversia constitucional 195/2020, en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno,¹² no se requiere necesariamente ser un órgano originario del Estado, pues si el refrendo de los decretos por parte de un Secretario de Estado reviste autonomía, debe concluirse que constituye un medio de control y, por lo tanto, se actualiza el supuesto de legitimación pasiva.¹³
53. Por ende, debe tenerse por demandada a la Secretaría General de Gobierno, dado que tiene injerencia en el proceso legislativo, al encontrarse invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder sobre la conformidad constitucional de sus actos.

¹² Resuelta bajo la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, aprobada por unanimidad de diez votos de los las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. El señor Ministro Pardo Rebolledo estuvo ausente durante esta votación.

¹³ Al respecto, véase, por analogía, el criterio desarrollado en la controversia constitucional 5/2001 y contenido en la tesis P./J. 109/2001, de este Tribunal Pleno, de rubro y texto: "**SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.** Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los "órganos de gobierno derivados", es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimación atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica. Por tanto, si conforme a los artículos [92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#) y [13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal](#), el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los [artículos 10, fracción II y 11, segundo párrafo](#), de la ley reglamentaria de la materia." Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de 2001, página 1104 y registro 188738.

54. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia Tesis: P./J. 104/2004, de rubro: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUÉLLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR.”**.¹⁴

55. En consecuencia, las autoridades demandadas tienen legitimación pasiva para comparecer al juicio, ya que a éstos se les atribuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representarlos.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.

56. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Oaxaca sostienen que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,¹⁵ en virtud de advertirse un caso de litispendencia, al existir un diverso juicio de amparo indirecto 687/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, pendiente de resolver, en el cual resulta quejosa la

¹⁴ Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 1817, de texto siguiente: “Conforme a los artículos 3o., fracción I, inciso a), 8o., 12, 16, 18, 31, fracción I y 32, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada, de la cual forma parte la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular, entre otras atribuciones, tiene la de refrendar las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el Gobernador expida o promulgue, para que sean obligatorios, así como la de administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado. En esa virtud, el Secretario General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí tiene legitimación pasiva para comparecer en controversia constitucional conforme a los artículos 10, fracción II y 11, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues está obligado legalmente a satisfacer, autónomamente, las exigencias que se le demandan respecto del refrendo de los decretos del Gobernador del Estado y su publicación.”.

¹⁵ “**Artículo 19.** Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

III. Contra normas generales, actos u omisiones que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; [...].”.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2021

Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, representante legal de la actora en la presente controversia.

57. La causa de improcedencia planteada tiene como requisito por regla general, que reunidas las circunstancias de identidad ahí previstas relacionadas con las partes, las normas generales, actos o omisiones impugnados sean materia de una controversia aún pendiente de resolver.
58. Dicha causal pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en una diversa se examine el mismo acto.
59. Ahora bien, en el caso, este Tribunal Pleno advierte que la promoción de un diverso juicio de amparo no puede dar lugar a considerar actualizada la causa de improcedencia de litispendencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, respecto de una controversia constitucional, pues se trata de un medio de control constitucional de diversa naturaleza.
60. En efecto, para que se actualice un caso de litispendencia, debe existir un medio de control de la misma naturaleza, que verse sobre la misma norma o acto y en el que intervengan las mismas partes.
61. En ese tenor, deviene infundada la causa de improcedencia planteada, en virtud de que no se actualiza en el caso la figura de litispendencia que refiere la parte demandada.
62. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca sostiene que la presente controversia resulta improcedente al no ser la vía idónea para impugnar una norma general como la reforma del artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, toda vez que la citada disposición legal regula aspectos relacionados con el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales por tanto, en

su caso, el organismo promovente debió recurrir la reforma referida mediante acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo que establece el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

63. Señala que resulta manifiesta y notoria la improcedencia de la controversia constitucional con arreglo a lo dispuesto por el artículo 19, fracciones III y VIII, en relación con el diverso 1º, de la Ley Reglamentaria de la Materia, y el 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, solicita el sobreseimiento en la controversia.
64. Dicha causal resulta infundada, pues contrario a lo que sostiene el Poder Legislativo Estatal, sí es procedente la presente controversia constitucional al ser promovida en contra de la constitucionalidad de una **norma** general, ello de conformidad con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

*“**Artículo 105.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:*

***I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales,** actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:*

[...]

***k)** Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y*

[...].”

65. En efecto, en la presente controversia constitucional el Instituto actor señala como norma reclamada el artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ello al estimar que la misma resulta violatoria entre otros principios constitucionales, del de autonomía, de ahí, que debe desestimarse la causal de improcedencia planteada por el Poder Legislativo estatal.

66. Por su parte, el Poder Ejecutivo sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con el diverso 20, fracción II, ambos de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
67. Aduce que una controversia constitucional resulta improcedente cuando los actos reclamados no existan, es decir, cuando no tengan consecuencias jurídicas en los términos planteados por el promovente; por lo que se actualiza dicha causal de improcedencia, en razón de que, como se acredita con la documental que para tal efecto exhibe, los actos reclamados al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, contrario a lo manifestado por la parte actora **revisten el carácter de constitucionales**, lo cual se corrobora con el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.
68. Deben desestimarse tales argumentos de improcedencia, dado que la constatación de una afectación en la esfera de sus atribuciones, es un aspecto que atañe al fondo y no a la improcedencia de la controversia constitucional a examen. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 92/99, emitida por el Tribunal Pleno, que a continuación se invoca: ***“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”***¹⁶
69. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal

¹⁶Tesis: P./J. 92/99, Registro digital: 193266, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página 710, de texto siguiente: ***“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.”***

donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia.

70. Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VIII, y 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el refrendo que esa Secretaría realizó al Decreto 2473, fue en base a las atribuciones conferidas por los artículos 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 34, fracciones XIX y XLII, del Reglamento Interno de la propia Secretaría, situación que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
71. De igual manera, este Tribunal Pleno estima que la causal planteada debe desestimarse, pues si en su planteamiento afirma que el refrendo no violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que ello involucra una argumentación relacionada con el fondo del asunto.
72. Dado que no se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia o razones que conlleven al sobreseimiento de la presente controversia constitucional, se procede al estudio del fondo del asunto.
73. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que el Instituto promovente impugnó el Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el periódico oficial 'Extra' del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.
74. No obstante, posterior a la presentación de la demanda, mediante Decreto Número 2736, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se adicionó una fracción VII, recorriéndose las fracciones subsecuentes del sexto párrafo del apartado

C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ahí que las fracciones impugnadas quedaron de la siguiente manera:

<p>Decreto número 2473, mediante el cual reforma los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el periódico oficial ‘Extra’ del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno.</p>	<p>Decreto Número 2736, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.</p>
<p>“Artículo 114. [...] C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021) El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p>	<p>“Artículo 114. [...] C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021) El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p>

<p>Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.</p> <p>El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie</p>	<p>Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.</p> <p>El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie</p>
--	--

<p>remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.</p> <p>(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos del Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como, de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal;</p> <p>II. Emitir criterios generales y lineamientos para la salvaguarda de los derechos consagrados en el artículo 3 de esta Constitución, de conformidad con la ley en la materia;</p> <p>III. Conocer, instruir y resolver en única instancia, las impugnaciones y acciones que se presenten contra las autoridades que nieguen o restrinjan el acceso a la información pública;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p>	<p>remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.</p> <p>(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos del Estado, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como, de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal;</p> <p>II. Emitir criterios generales y lineamientos para la salvaguarda de los derechos consagrados en el artículo 3 de esta Constitución, de conformidad con la ley en la materia;</p> <p>III. Conocer, instruir y resolver en única instancia, las impugnaciones y acciones que se presenten contra las autoridades que nieguen o restrinjan el acceso a la información pública;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p>
---	---

<p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.</p> <p>VI. Promover entre los servidores públicos y la población en general la cultura de la transparencia y el acceso a la información, y</p> <p>SIN CORRELATIVO</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017)</p> <p>VII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>VIII. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p>	<p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.</p> <p>VI. Promover entre los servidores públicos y la población en general la cultura de la transparencia y el acceso a la información, y</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 23 DE OCTUBRE DE 2021)</p> <p>VII. Preservar e incentivar las prácticas de transparencia comunitaria.</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017)</p> <p>VIII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.</p> <p>(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>IX. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p>
--	---

<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.</p>	<p>El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.</p>
<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el órgano garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.”</p>	<p>(REFORMADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2021)</p> <p>El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el órgano garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.”</p>

75. Como se desprende del cuadro anterior, con el Decreto publicado con posterioridad al Decreto hoy impugnado, las normas impugnadas, no sufrieron cambio de sentido normativo, únicamente se modificó el número de la fracción VIII, por el número de fracción IX con el que se identifica, ello al haberse adicionado una fracción, por lo que, no han cesado sus efectos y en nada cambia el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO.

76. Por cuestión metodológica los conceptos de invalidez serán examinados atendiendo al siguiente orden temático:

<p>TEMA I. VIOLACIONES AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO IMPUGNADO.</p> <p>I.I. Publicación en la Gaceta Parlamentaria de dos dictámenes con un número de firmas distinto.</p> <p>I.II. El Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, carece de fe pública para verificar las firmas.</p> <p>I.III. Ilegal promulgación del Decreto impugnado.</p> <p>I.IV. El Decreto impugnado no fue firmado por los titulares de las dependencias involucradas.</p> <p>I.V. No se ordenó su publicación inmediata.</p>
<p>TEMA II. ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, EN PARTICULAR, EN SU ARTÍCULO 114, APARTADO C, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, PUBLICADAS EN EL EXTRA PERIÓDICO OFICIAL, EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.</p> <p>II.I. Parámetros a los que debe sujetarse las entidades federativas en la creación de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.</p> <p>II.II. Omisión de establecer un régimen transitorio.</p> <p>II.III. Violación al gasto público.</p> <p>II.IV. Violación al diseño constitucional del artículo 6° Constitucional.</p> <p>II.V. Incertidumbre e inseguridad jurídica por antinomia.</p>

TEMA I. VIOLACIONES AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO IMPUGNADO.

77. En primer orden serán examinados los argumentos planteados por el Instituto promovente, relacionados con irregularidades en el proceso legislativo que dio lugar al Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en particular, en su artículo 114, apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo y; las fracciones IV, V y VIII, publicadas en el Extra Periódico Oficial, el uno de junio de dos mil veintiuno.

I.I. Publicación en la Gaceta Parlamentaria de dos dictámenes con un número de firmas distinto.

78. El Instituto promovente manifiesta que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria dos dictámenes con un número de firmas distinto: el primero, publicado para efectos de la primera lectura el treinta de septiembre de dos mil veinte, con tres firmas y el segundo, publicado para efectos de publicidad de la segunda lectura de catorce de abril de dos mil veintiuno, con cinco firmas.
79. Además, sostiene que posteriormente sin haber subsanado ese requisito esencial, el dictamen o los dictámenes se sometieron a votación sin que los diputados tuvieran la certeza de cuál era el documento correcto y los fundamentos para considerarlo por tal carácter. Incluso, aduce que, durante la votación, la Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez se manifestó en el sentido de que existía un error en los dictámenes porque no sabía cuál era el documento aprobado, por lo que se abstendría de votar para no violar el procedimiento legislativo. No obstante, dicha manifestación, la votación continuó.
80. Este Tribunal Constitucional considera que no asiste razón a la promovente, pues si bien para demostrar que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen aprobatorio relativo a la reforma del artículo 114, apartado c), para efectos de la primera lectura, con únicamente con tres firmas de los integrantes de la comisión dictaminadora, cita la página de internet:

https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200930a/53_8_1.pdf, al remitirse a la misma no permite su acceso.

81. En cambio, de la página de la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, publicada en la página de internet:
- https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200930a/53_8_2.pdf, se desprende el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales en Primera lectura de fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, firmado por todos los integrantes de la citada Comisión Permanente, como se advierte de lo siguiente:

DICTAMEN:

ÚNICO.- La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción I, 51, 53 fracción I y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículos 63, 64, 65 fracción XIII, 66, fracciones I y VIII, Y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 26 párrafo primero, 27, fracciones VI y XI, 29, 33, 34, 36, 38, 40 y 42 fracción XIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, **RESUELVEN EN SENTIDO POSITIVO** la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En razón de lo expuesto, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, somete a consideración el siguiente proyecto de:

D E C R E T O.

ARTICULO PRIMERO. SE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, LA FRACCIÓN IV, V, DEL PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA FRACCIÓN VIII TODOS DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 114.- (...)

A (...)

B (...)

C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

<p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.</p> <p>Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.</p> <p>Su Pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.</p> <p>(...)</p> <p>Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.</p> <p>El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I.- a III. (...)</p> <p>IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.</p> <p>(...)</p> <p>VI. (...)</p> <p>VII. (...)</p> <p>VIII. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.</p> <p>El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.</p> <p>El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>D) (...)</p>	
---	--

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.


SEGUNDO. El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.

Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 22 de Septiembre de 2020.

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES


DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ
DIPUTADA PRESIDENTA


MARITZA ESCARLET VÁSQUEZ GUERRA
DIPUTADA INTEGRANTE


NOÉ DOROTEO CASTILLEJOS
DIPUTADO INTEGRANTE

COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES


FABRIZIO EMIR DÍAZ ALCÁZAR
DIPUTADO INTEGRANTE


ELENA CUEVAS HERNÁNDEZ
DIPUTADA INTEGRANTE

82. Asimismo, de la página de la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20210414b/65_5_4.pdf, se desprende el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales en Segunda lectura de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, firmado por todos los integrantes de la citada Comisión Permanente, siendo el mismo dictamen que el publicado en la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte.
83. Cabe señalar, que no pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que como lo refiere el promovente en su demanda, con fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron ante la Secretaría de Servicios Legislativos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual con fecha veinte de mayo de dos mil veinte, en la séptima sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, se aprobó en positivo el dictamen relativo a la iniciativa presentada y que del acta se desprende que todas las y los integrantes votaron a favor.
84. Enseguida, con fecha diecinueve de agosto de dos mil veinte, se realizó la publicidad en primera lectura en la Gaceta Parlamentaria en el punto número 68.9 del dictamen emitido por la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, sin embargo, efectivamente como lo afirma el instituto promovente, en esa misma fecha la Diputada Elena Cuevas Hernández, Diputada integrante de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, presentó oficio ante el Secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Oaxaca, por medio del cual pidió el retiro de su firma del dictamen, en atención a ello, el dictamen que fue retirado del orden del día de dicha sesión.

85. Con posterioridad, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales -con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte-, **aprobó un nuevo dictamen firmado por todos (cinco) los integrantes de la citada Comisión Permanente**, relativo a la reforma del artículo 114, apartado c), en la cual se agregan nuevos argumentos, dicho documento fue entregado a la Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintinueve de septiembre siguiente para efectos de la primera lectura, tal como se advierte de la página de la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, publicada en la página de internet: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20200930a/53_8_2.pdf, asimismo, dicho dictamen fue publicado para segunda lectura, tal como se advierte de la página de la Gaceta Parlamentaria de la sesión ordinaria de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno: https://www.congresooaxaca.gob.mx/docs64.congresooaxaca.gob.mx/gaceta/20210414b/65_5_4.pdf, el cual como se acreditó, fue votado y aprobado por el Congreso del Estado por mayoría de veintiocho votos.

86. En ese orden de ideas, es de concluir que el retiro de la firma de la Diputada Elena Cuevas Hernández, Diputada integrante de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales no puede servir para demostrar la invalidez del Decreto impugnado, pues el dictamen respecto del cual la mencionada Diputada retiró su firma fue modificado y es anterior al que dio origen al Decreto hoy impugnado.

I.II. El Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, carece de fé pública para verificar las firmas.

87. Por otra parte, en su sexto concepto de invalidez el Instituto actor sostiene que fue ilegal la publicación en el Extra Periódico Oficial, cómo se hizo del decreto número 2473, mediante el cual se reforma la denominación del apartado C, los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo, las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues aduce que dicha publicación no cumple con los mandamientos y requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en sus artículos 53, fracciones I y II, 58, 80 y 84.
88. Refiere que en la publicación de fecha martes uno de junio de dos mil veintiuno, no se dio cumplimiento con las disposiciones constitucionales citadas, puesto que, si bien aparece después del nombre del titular del Ejecutivo Estatal, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rúbrica- El Secretario General de Gobierno Ing. Francisco Javier García López.- Rúbrica; también lo es que éste carece de fe pública para determinar jurídica y constitucionalmente que efectivamente aparece la firma tanto del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca como la suya.
89. Lo anterior resulta **infundado**, pues contrario a lo que señala el Instituto actor, el Secretario de Gobierno actúo de conformidad con lo previsto en los artículos 53, fracción I¹⁷ y 58, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, así como a los diversos 34, fracciones XIX y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y 9, fracción XII, del Reglamento Interno de la Secretaria General de Gobierno, de ahí que no se actualiza el vicio que le atribuye el Instituto promovente.

¹⁷ “**Artículo 53.** En el proceso de elaboración, promulgación y publicación de las leyes o decretos se observarán las reglas siguientes:

I. El estudio, dictaminación, discusión y aprobación de una iniciativa se realizará conforme a esta Constitución y la normatividad del Congreso;
[...].”

90. En efecto, el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca¹⁸, establece la forma en que deberá ser promulgado por el Ejecutivo todo proyecto aprobado, y entre los elementos que establece, se encuentra que la promulgación debe de contener el siguiente: **“(Fecha y firma del Gobernador, del Secretario General de Gobierno)”**.

91. Por su parte, el artículo 34, fracciones I, XIX y XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca prevé:

“Artículo 34. A la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[...]

I. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que emita el Gobernador del Estado, así como atender los asuntos que le encomiende;

[...]

XIX. Certificar todo tipo de documentos, así como, dar legalidad a todos los actos relativos al despacho de los asuntos del Ejecutivo;

[...]

XXVIII. Refrendar con su firma las leyes o decretos enviados para su promulgación y publicación por el Congreso del Estado, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que expide el Gobernador del Estado y aquellas que deban de regir en la entidad y establezca la normatividad aplicable en la materia, remitiéndolos inmediatamente a la consejería jurídica del gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; [...].”

92. Asimismo, el artículo 9, fracción XII, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, establece:

“Artículo 9. La Secretaría contará con una Secretaria o Secretario, quien

¹⁸ **Artículo 58.** Todo proyecto que sea aprobado definitivamente será promulgado por el Ejecutivo en la siguiente forma:

“N.N. Gobernador (aquí el carácter que tenga, si es constitucional, interino, etc.) del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes, hace saber:

Que la Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

La (aquí el número ordinal que le corresponda) Legislatura del Estado, decreta:

“(Aquí el texto de la ley o decreto).

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. - (Fecha y firma del Presidente y Secretarios).

Por tanto, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

(Fecha y firma del Gobernador, del Secretario General de Gobierno)”.

dependerá directamente del Titular del Ejecutivo y tendrá las siguientes facultades:

[...]

XII. Refrendar con su firma los actos relativos al despacho de los asuntos del Titular del Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política y demás ordenamientos legales aplicables; así como certificar todo tipo de documentos relacionados con la Administración Pública Estatal Centralizada y Paraestatal, que encuentre en el archivo de la Secretaría.

[...]”

93. De lo anterior se advierte, que conforme a los ordenamientos en cita, entre las facultades del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca se encuentran la de firmar los decretos que promulgue el Ejecutivo Estatal; que a dicho Secretario le corresponde cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que emita el Gobernador del Estado, así como atender los asuntos que le encomiende; y **certificar todo tipo de documentos, así como, dar legalidad a todos los actos relativos al despacho de los asuntos del Ejecutivo**, de ahí que, lo procedente es desestimar el planteamiento del Instituto actor.

I.III. Ilegal promulgación del Decreto impugnado.

94. Por otra parte, la actora aduce que el Decreto impugnado se apartó de la forma solemne establecida en el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.
95. Lo anterior resulta **infundado** en atención a lo siguiente:
96. El artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca establece lo siguiente:

“Artículo 58. *Todo proyecto que sea aprobado definitivamente será promulgado por el Ejecutivo en la siguiente forma:*

“N.N. Gobernador (aquí el carácter que tenga, si es constitucional,

interino, etc.) del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes, hace saber:

Que la Legislatura del Estado ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

La (aquí el número ordinal que le corresponda) Legislatura del Estado, decreta:

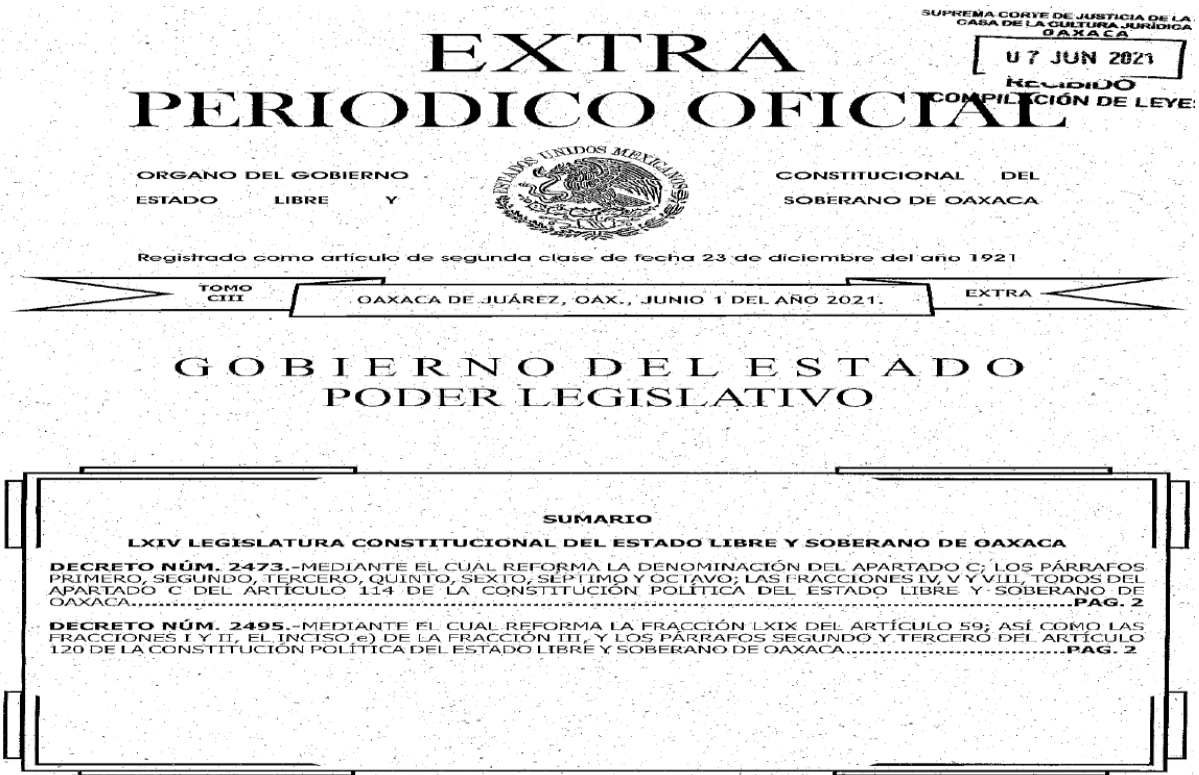
"(Aquí el texto de la ley o decreto).

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.- (Fecha y firma del Presidente y Secretarios).

Por tanto, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

(Fecha y firma del Gobernador, del Secretario General de Gobierno)".

97. En el caso, la promulgación del Decreto se hizo de la siguiente manera:





Mtro. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A
SUS HABITANTES HACE SABER:

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DEL
ESTADO DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO

QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, HA TENIDO A BIEN, APROBAR
LO SIGUIENTE:

DECRETO No. 2473

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para quedar como sigue:

Artículo 114. -

A. ...

B. ...

C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno, en los términos que establezca la ley.

Sesionará colegiadamente y públicamente; se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.

Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso de Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.

Sus integrantes, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Solo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme a la legislación que establezca el Estado, observando en todo momento el principio de austeridad.

El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:

I. a la III. ...

IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

V. Las resoluciones del Órgano Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejo Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.

VI y VII. ...

VIII. Las demás que señale: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.

El Órgano Garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará

los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.

El Órgano Garante coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.

D.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo del H. Congreso del Estado, San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, a 14 de abril de 2021.- Dip. Karina Espino Carmona, Vicepresidenta.- Dip. Rocío Machuca Rojas, Secretaria.- Dip. Saúl Cruz Jiménez, Secretario.- Dip. Maritza Escarlet Vázquez Guerra, Secretaria.- Rúbricas.

Por lo tanto, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio de Gobierno, Centro, Oax., a 22 de abril de 2021. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Ing. Francisco Javier García López.- Rúbrica.

98. De lo anterior se advierte, que contrario a lo señalado por el Instituto actor, la promulgación del Decreto impugnado se efectuó correctamente, cumpliendo en su integridad lo dispuesto el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

I.IV. El Decreto impugnado no fue firmado por los titulares de las dependencias involucradas.

99. El promovente sostiene que una vez remitido el dictamen aprobado al Gobernador del Estado, se actualizó el vicio formal consistente en que el decreto no fue firmado por los titulares de las dependencias involucradas. Sustenta su afirmación en lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
100. Dicho argumento es **infundado** pues en el caso concreto la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformó el apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, fue presentada por las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y la misma fue firmada por la mayoría del citado grupo parlamentario.
101. Ahora bien, una vez aprobado de manera definitiva el proyecto, efectivamente, fue remitido el Decreto al Ejecutivo del Estado para los efectos de su promulgación y publicación.
102. Al respecto, de autos se desprende que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cumplió debidamente con el mandato constitucional de promulgar y publicar el Decreto 2473, pues el mismo fue rubricado tanto por el citado titular del Ejecutivo del Estado, como por el Secretario General de Gobierno, ello en debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 52, 53, fracciones I y II, y, 58, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, así como a los diversos 34,

fracciones XIX y XXVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y 9, fracción XII, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, de ahí que no se actualiza el vicio que le atribuye el Instituto promovente.

103. Con fundamento en lo anterior, lo procedente es declarar infundado el argumento analizado.

I.V. No se ordenó su publicación inmediata.

104. El promovente se duele que la publicación del Decreto impugnado se realizó más de veintisiete días hábiles después, contados a partir de la fecha de promulgación.
105. Al respecto, este Tribunal Pleno estima que dicho argumento resulta **infundado** en atención a lo siguiente:
106. De conformidad con el artículo 53, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, aprobado un proyecto de ley o decreto, se remitirá al Ejecutivo quien, si no tuviere observaciones, debe publicarlo inmediatamente, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
107. En el caso, el Decreto impugnado fue publicado el **uno de junio de dos mil veintiuno**, esto es, al día veintiocho siguiente a la fecha de su promulgación, la cual tuvo verificativo el veintidós de abril de dos mil veintiuno.
108. No obstante, dicha razón no da lugar a declarar la invalidez de la norma impugnada.
109. Sobre el particular destaca que en la acción de inconstitucionalidad 31/2019, se hizo referencia a la línea jurisprudencial relativa a que dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal

que trascienden de manera fundamental a la norma, de suerte tal que provocan su invalidez o inconstitucionalidad.

110. De igual forma este Tribunal Pleno ha emitido criterio en el sentido de que para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo planteadas en una acción de inconstitucionalidad tienen poder invalidante por afectar el principio de representación legislativa y de libre discusión de las normas, contenidos en la Constitución Federal, es necesario evaluar el cumplimiento de una serie de estándares, los cuales tienen como objetivo determinar si las irregularidades denunciadas impactan o no en la calidad democrática de la decisión final. Esos estándares se enumeran a continuación:

1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates;
2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y,
3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

111. De lo anterior se sigue la ineludible referencia a la calidad democrática de la decisión final en un procedimiento legislativo, es decir, que la Constitución Federal impone ciertos requisitos para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales éstas no pueden considerarse válidas, de modo que, para lograr el respeto de los

principios de democracia y representatividad que consagra nuestro sistema constitucional, es de suma importancia la forma en que son creadas o reformadas, de ahí el peso de las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, pues finalmente aseguran el cumplimiento de los principios democráticos, por virtud de los cuales:

1. Se permite a los legisladores su participación libre, responsable e informada en el estudio, dictamen, discusión y aprobación de las iniciativas de ley o decretos que se someten a su consideración; y,
 2. Se da certeza y claridad al procedimiento legislativo, lo que implica que los legisladores tengan un conocimiento razonable de las iniciativas de ley o decretos que estudian y aprueban.
112. En otras palabras, la calidad democrática de la decisión final en el Congreso, no sólo depende de la expresión y defensa de la opinión del legislador en un contexto de deliberación pública, sino que esa participación se base en un conocimiento informado y razonable de los documentos por aprobar.
113. Así tomando en consideración los parámetros antes precisados, este Tribunal concluye que la publicación del Decreto veintiocho días después no da lugar a la invalidez del mismo, ello al no haber impedido ni la participación de las fuerzas políticas, ni el conocimiento del decreto impugnado, ni la impugnación del mismo.
114. Derivado de lo anterior, lo procedente es declarar infundados los argumentos analizados.

TEMA II. ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, EN PARTICULAR, EN SU ARTÍCULO 114, APARTADO C, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO Y; LAS FRACCIONES IV Y VIII (HOY FRACCIÓN IX), PUBLICADAS EN EL EXTRA PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

II.I. Parámetros a los que debe sujetarse las entidades federativas en la creación de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

115. En relación con la creación de los organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas, en sesión de ocho de julio de dos mil veintiuno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 127/2020¹⁹, en la cual se retomaron los parámetros aprobados en la acción de inconstitucionalidad 74/2018²⁰, el Pleno concluyó que de los artículos 6° y 116, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtienen los parámetros a los que las entidades federativas deben sujetarse en la creación de los órganos garantes, a saber:

- 1) Para el ejercicio del derecho a la información, tanto la Federación como los Estados en el ámbito de sus competencias deben observarse los principios y bases que establezca la Constitución Federal.

¹⁹ Fallada por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat con precisiones, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando séptimo, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, denominado “Parámetros a los que deben sujetarse las entidades federativas, en la creación de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”, consistente en retomar los parámetros aprobados en la acción de inconstitucionalidad 74/2018. El señor Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra y anunció voto particular. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat anunciaron sendos votos concurrentes.

²⁰ Fallada en sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, por mayoría de seis votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carranca, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea. Los Ministros Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo votaron en contra.

2) Deben contar con un organismo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

3) La conformación numérica de los integrantes del órgano garante local, debe corresponder con un número impar y estos se denominarán Comisionados.

4) La intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación de los integrantes del órgano garante.

5) Previamente al nombramiento debe realizarse una amplia consulta a la sociedad.

6) La duración del encargo de los comisionados no será mayor a siete años.

7) Debe procurarse la equidad de género entre los integrantes.

116. La reforma constitucional en materia de transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero del dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Federal en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6 a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que cuyo objetivo fuera homogeneizar el contenido de la normatividad que rige el acceso a la información pública en el país y armonizar la interpretación y alcance de los principios y bases establecidos en el párrafo segundo del artículo

6º constitucional, pues el establecimiento de parámetros iguales para todos los niveles de gobierno permite contar con una base sólida a fin de que el derecho de que se trata sea igual para todos.

117. En los trabajos legislativos que dieron lugar a dicha reforma, se estableció que, en congruencia con el sistema federal adoptado por nuestro país, dicha ley general establece los estándares mínimos y los procedimientos en la materia a fin de asegurar que en todo el país la protección de los derechos en comento y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual dará certeza a los gobernados en cuanto a los requisitos para la integración de los órganos garantes, los criterios de clasificación y reserva de información, los procedimientos, plazos, entre otros.
118. Además, se precisó que, atendiendo a sus circunstancias, condiciones y realidades específicas, corresponderá a las legislaturas de cada entidad federativa adaptar, perfeccionar o, aún más, mejorar o ampliar los mínimos establecidos en la ley general de mérito y con ello contribuir a un derecho que cumpla las condiciones de progresividad y gradualidad necesarias para responder a la complejidad de nuestro país, de modo que se pueda cumplir un doble objetivo, por un lado, tener bases compartidas sobre la comprensión, características y requisitos del ejercicio del derecho de acceso a la información pero, por otro lado, respetar el sistema federal reconociendo ámbitos de regulación propios de cada entidad federativa.
119. Así, en cumplimiento a esa reforma constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince.

120. Al igual que el Poder Reformador de la Constitución, en la exposición de motivos, el legislador federal indicó que su emisión *“busca tener el ordenamiento legal que pueda distribuir competencias en las entidades federativas a efecto de que los Congresos Locales se encuentren en posibilidad de emitir sus propios ordenamientos legales relacionados con el acceso a la información pública, utilizando como mínimo los principios, bases y procedimientos establecidos en dicha ley general”*.

121. También se indicó que dicho instrumento normativo permite uniformar, homologar, estandarizar o armonizar las reglas, principios, bases, procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública permitiendo, a la vez, que los distintos órdenes de gobierno precisen o incluso los amplíen de manera que atiendan las condiciones específicas aplicables a sus realidades.
122. Por último, en el apartado relativo a la coexistencia de leyes el legislador federal indicó que legislar en materia del derecho de acceso a la información no constituye una facultad exclusiva de la Federación, sino una atribución concurrente entre los niveles de gobierno federal y estatal, y que se identifica a partir de la emisión de un instrumento normativo general o ley marco.
123. Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno ha sostenido en diversos precedentes²¹ que entre las finalidades de la reforma constitucional en

²¹ Por ejemplo, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2016, fallada el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas con reservas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. apartándose de algunas conclusiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su parte introductoria. En la acción de inconstitucionalidad 37/2016, fallada el seis de mayo de dos mil diecinueve, por mayoría de nueve votos de los Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales por distintas consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández apartándose de las consideraciones, Laynez Potisek separándose de algunas consideraciones, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea, respecto del apartado VII, relativo

comento se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases del derecho de transparencia y acceso a la información a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlo de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.

124. El Poder Reformador de la Constitución estimó que esta unificación se lograría a través de la emisión de una ley general que desarrolle las directrices y aspectos mínimos aplicables en la materia reconocidos en el texto constitucional, sin que tal circunstancia infrinja el sistema federal adoptado por nuestro país, pues se reconoce el deber de las entidades federativas de adecuar su legislación a la general y, a la vez, la posibilidad de que la amplíen o perfeccionen, en la inteligencia de que esto último sea de acuerdo a su ámbito de competencia y, sobre todo, sin contravenir los mínimos establecidos tanto por la Constitución Federal como por la mencionada ley general.
125. Ese doble propósito se evidenció, por una parte, en las exposiciones de motivos antes referidas y, por otra, en el texto constitucional reproducido al establecer que la ley general dispondrá las bases y principios del derecho en comentario, lo que significa que la ley federal y de las entidades federativas deben atender esos aspectos mínimos, sin vedar, en ningún momento, su potestad para legislar en la materia, siempre y cuando no contravengan esos parámetros generales.

al estudio de fondo, en su parte primera, consistente en declarar infundado el primer concepto de invalidez. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra. Los señores Ministros Aguilar Morales, Piña Hernández y Laynez Potisek anunciaron sendos votos concurrentes. Así como en la acción de inconstitucionalidad 127/2020, fallada el ocho de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones.

126. De esa manera, las legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos tanto en la Constitución Federal como en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero a la vez tienen libertad para ampliarlos o precisarlos atendiendo a su realidad, siempre y cuando respeten dichos mínimos, bases y principios, y lo legislado localmente se relacione con su específico ámbito de competencia.
127. Además, de esa forma se da coherencia al sistema normativo existente a partir de la reforma constitucional de mérito y en virtud del cual existe una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que desarrolla los principios y bases reconocidos constitucionalmente, una ley federal aplicable en ese ámbito de gobierno y leyes aplicables en las distintas entidades federativas que, evidentemente, rigen los organismos garantes y demás aspectos relacionados con esa materia en su respectivo ámbito de competencia.
128. Una vez precisado lo anterior, a continuación, se analizan los conceptos planteados por el Instituto promovente:

II.II. Omisión de establecer un régimen transitorio.

129. El Instituto actor en su segundo y séptimo conceptos de invalidez hace valer que el Decreto impugnado es violatorio al extinguir jurídicamente al órgano responsable de garantizar la observancia del artículo 6° de la Constitución General en el ámbito local, sin prever una continuidad institucional y procedimental por un plazo determinado ni la sustitución inmediata del ente o la subrogación en sus obligaciones, como alternativas de solución, afectando con ello tanto el ejercicio y protección

de los derechos en la materia, como la continuación de los procedimientos iniciados.

130. Aduce que en el caso en particular se requería de establecer una norma de tránsito concreta y/o mecanismos específicos que determinaran la situación legal en que debía de quedar el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca ante las reformas aprobadas por el Congreso local permanente.
131. Considera que se debía de establecer dentro del derecho transitorio las condiciones específicas en que debería quedar el Instituto que en realidad se extingue, que no sólo tenía personalidad jurídica propia, sino que derivado de su actuar en el mundo jurídico tiene personal a su cargo, por lo cual ante la incertidumbre que se genera con esa extinción, deja un vacío jurídico **dentro del periodo de sesenta días en el que se va a emitir una nueva Ley que regulará al ente gubernamental ahora creado**, periodo en el que el Estado de Oaxaca carecería de órgano garante.
132. También señala que, por un lado el Decreto impugnado desaparece al actual Órgano Garante sin prever una sustitución gradual y por el otro, es omiso en establecer la forma como se deberán cumplir las obligaciones a su cargo hasta en tanto el nuevo órgano garante entre en funciones dejando de esa forma un vacío legal que coarta el derecho fundamental de acceso a la información pública, ante la ausencia de mecanismos confiables establecidos de manera expresa por el legislador.
133. Manifiesta que el Decreto combatido resulta insuficiente, porque genera inseguridad jurídica en la estabilidad laboral de los integrantes del Instituto y con ello se compromete el funcionamiento del mismo, sin que se justifique el acto de molestia.

134. A fin de determinar si la norma impugnada contraviene el orden constitucional, debe analizarse si ésta resulta acorde con el diseño institucional homogéneo establecido tanto en la Constitución General como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
135. Tomando como base los parámetros de regularidad antes expuestos, se advierte que el legislador local cuenta con libertad de configuración para legislar e instituir un órgano garante de transparencia y protección de datos personales en el ámbito local, que garantice el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, siempre y cuando cumpla con las reglas, principios, bases, procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública permitiendo, que se prevén constitucionalmente y en la Ley General de la materia, permitiéndole adecuarla a su realidad social e incluso, perfeccionarla o ampliarla, siempre y cuando esas modificaciones, atiendan al sistema nacional implementado.
136. En principio, resulta necesario precisar que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en particular, su artículo 114, apartado C, párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; y las fracciones IV, V y VIII, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el uno de junio de dos mil veintiuno, dispone:

“ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primer, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo y; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para quedar como sigue:

Artículo 114.-...

A...

B...

C. **EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.**

*El **Órgano Garante** de Acceso a la Información Pública, **Transparencia**, Protección de Datos Personales y **Buen Gobierno** del Estado de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, especializado, **independiente**, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable **de salvaguardar el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de salvaguardar el ejercicio** de los derechos de acceso a la información pública, a la protección de datos personales y **garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno**, en los términos que establezca la ley.*

*Sesionará colegiadamente y públicamente, se regirá por los principios de certeza, legalidad, **independencia**, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad, **buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.***

*Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y **cuatro** Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. **La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años.***

...

Sus integrantes**, no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo cargo o comisión en el servicio público, excepto en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, siempre que no medie remuneración alguna. Sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución y las leyes de la materia. Percibirán una remuneración conforme la legislación que establezca el Estado, **observando en todo momento el principio de austeridad.

*El **Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca** contará con las siguientes atribuciones:*

I a la III.

IV. Remitir, para conocimiento a petición fundada al organismo garante federal los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

*V. Las resoluciones del **Órgano Garante** son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado podrá interponer recurso de revisión ante el Poder Judicial del Estado en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad estatal y nacional conforme a la ley.*

VI. y VII. ...

VIII. Las demás que señale; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Constitución Política y las leyes aplicables en la materia.

*El **Órgano Garante** tendrá un Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, de carácter honorífico y sin goce de sueldo, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados por el periodo de cinco años. La Ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente será substituido el consejero de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La Ley establecerá las facultades del Consejo Consultivo.*

*El **Órgano Garante** coordinará sus acciones con el Órgano Garante federal, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.*

...

Transitorios

PRIMERO.- *El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.*

SEGUNDO.- *El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.”*

137. Como se advierte de la lectura de las reformas al artículo 114, apartado C, de la Constitución del Estado de Oaxaca, las mismas consistieron en lo siguiente:

- Se **cambia la denominación** del organismo garante local de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a: **Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.**
- Se adiciona, desde el texto de la Constitución Local, una función que por ende se erige como en fundamental: **garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno.**
- **Aumenta cuatro principios** a los que ya debían regir su funcionamiento, a saber: **buena fe, no discriminación, oportunidad y buen gobierno.**
- Respecto del **número de Comisionados que lo integran lo cambia, para ahora conformarse con cinco Comisionados. De ellos, cuatro ciudadanos y un presidente.**
- Determina que **la presidencia será rotativa cada dos años.**
- Ordena que la remuneración de los Comisionados **deberá observar el principio de austeridad.**
- Respecto de Consejo Consultivo, **agrega que sus facultades las establecerá la ley.**

138. Al respecto, este Tribunal Pleno advierte que el planteamiento de la actora resulta **infundado**, pues contrario a lo sostenido por el instituto promovente, no se deja en estado de inseguridad de lo que sucederá con el antiguo Instituto y sus integrantes, ni los parámetros bajo los cuales serán sustanciados los procedimientos vigentes o iniciados durante la transición de un órgano a otro, pues de los artículos primero y segundo transitorio de la reforma impugnada se advierte lo siguiente:

“PRIMERO.- *El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.*

SEGUNDO.- *El Congreso del Estado emitirá la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.”*

139. De los anteriores preceptos se desprende que derivado de la reforma combatida el Congreso precisó que se emitiría una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto.
140. En cumplimiento a lo anterior, con fecha cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, fue publicada la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en cuyos artículos TERCERO y CUARTO TRANSITORIOS se prevé lo siguiente:

“PRIMERO. *La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.*

SEGUNDO. *Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016.*

TERCERO. *Los procedimientos iniciados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016, seguirán rigiéndose por la misma, hasta su conclusión.*

CUARTO. *El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designará a las y los Comisionados integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, al o la titular de la Contraloría General e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, por el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados*

presentes, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Por única ocasión las y los Comisionados del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, serán elegidos en los términos siguientes:

- a. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo tres años.*
- b. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo cuatro años.*
- c. Una Comisionada o Comisionado que durará en su encargo cinco años.*

Por única ocasión los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, serán elegidos en los términos siguientes:

- a. Un o una integrante que durará en su encargo un año.*
- b. Un o una integrante que durará en su encargo dos años.*
- c. Un o una integrante que durará en su encargo tres años.*
- d. Un o una integrante que durará en su encargo cuatro años.*
- e. Un o una integrante que durará en su encargo cinco años.*

QUINTO. Los recursos económicos, materiales y técnicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, creado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016, pasarán a formar parte del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, creado mediante este Decreto.

SEXTO. Se dejan a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en la modalidad de su contratación.

SÉPTIMO. El Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en el ámbito de su competencia, emitirá el Reglamento Interno y las demás disposiciones normativas para dar cumplimiento a la presente Ley, en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir del nombramiento de los nuevos Comisionados y Comisionadas.

OCTAVO. *Se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente Decreto.”*

141. Así de lo previsto en los artículos antes transcritos, se advierte que los procedimientos iniciados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, seguirán rigiéndose por la misma, hasta su conclusión.
142. Asimismo, en la citada ley se precisa que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designará a las y los Comisionados integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, al o la titular de la Contraloría General e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, por el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la dicha Ley.
143. Además, se advierte que los recursos económicos, materiales y técnicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, creado conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha once de marzo de dos mil dieciséis, pasarán a formar parte del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, creado mediante este Decreto.
144. Se dejaron a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en la modalidad de su

contratación y se estableció que el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en el ámbito de su competencia, emitiría el Reglamento Interno y las demás disposiciones normativas para dar cumplimiento a dicha Ley, en un plazo no mayor de noventa días naturales, contados a partir del nombramiento de los nuevos Comisionados y Comisionadas.

145. Bajo ese tenor, es que resulta **infundado** el argumento planteado por el Instituto promovente.

II.III. Violación al gasto público.

146. En esencia en su tercer concepto de invalidez el Instituto actor hace valer que con el Decreto impugnado se impuso una carga económica al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca o el órgano que lo sustituya, lo que evidentemente constituye una invasión directa a su esfera de competencia constitucional, toda vez que hecha la designación de los nuevos comisionados se generarán derechos a favor de éstos, quedando obligado legalmente el Instituto o el órgano que finalmente le sustituya a cubrir su pago, independientemente de si se observó o no la ampliación presupuestal.
147. Sostiene que en el caso concreto se violó su autonomía presupuestaria, contenida en el artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vulnerando con ello, los principios rectores de división de poderes, control del ejercicio del gasto público, así como de certeza jurídica y legalidad, en lo relativo a la conculcación de la autonomía de otros poderes públicos, toda vez que va en contra del interés patrimonial y las funciones que derivado de su ejercicio tiene a su cargo el Organismo Público Autónomo denominado Instituto de Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como el Ejecutivo del Estado; el primero respecto de la tutela del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° constitucional y el segundo respecto a la facultad de la elaboración del presupuesto destinado a los entes del Estado; transgrediendo de igual forma las leyes y reglamentos bajo los cuales se enmarca el procedimiento específico para la aprobación de un decreto con impacto al gasto público.

148. En efecto, refiere que la legislatura expidió un Decreto, sin que a la fecha exista una aprobación de la ampliación presupuestal del Instituto. De ahí la afirmación de que con la eventual expedición y publicación del Decreto se ha materializado ya una invasión de poderes o competencias constitucionales, por cuanto a la aprobación y deliberación del ejercicio del presupuesto asignado para el ejercicio de dos mil veintiuno.
149. Además sostiene que del Decreto impugnado se observa que los legisladores fueron omisos en realizar un análisis de “estimación de impacto presupuestario”, lo que vulnera directamente al funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca o el órgano que lo sustituya, ya que afecta el gasto programado y destinado al desarrollado de sus actividades, máxime que el presupuesto que ejerce para el año que corre fue proyectado en la implementación de gasto corriente y ordinario y para actividades de promoción y seguimiento de las funciones del mismo.
150. Concluye que la falta estimación presupuestal de la reforma legislativa vulnera el principio del debido proceso en la expedición de leyes y/o reformas y más aún, conculca el desarrollo del ejercicio presupuestario proyectado para el año que corre en detrimento del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Oaxaca, así como de la actora pues los efectos que deben de calificarse con cierto e inmediatos porque bien la reforma aludida conserva la característica del nuevo órgano como autónomo del Estado, especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica propia, con plena autonomía técnica, de gestión, pero no sobre el ejercicio de su presupuesto, pues el legislador pretende que con el presupuesto asignado para este ejercicio de su presupuesto, se aumente la plantilla de Comisionados per se de trabajadores e infraestructura para ponerlas en funcionamiento poniéndose en riesgo la estabilidad financiera del Instituto y además la estabilidad laboral de sus integrantes.

151. Este Tribunal Pleno estima que dicho argumento resulta **infundado** por lo siguiente:
152. Aunque el decreto impugnado previó el aumento del número de comisionados, no resulta una exigencia de su emisión ordenar que el Congreso realizara las adecuaciones presupuestarias correspondientes para la implementación de la reforma.
153. En efecto, la ausencia de los elementos centrales para la implementación de dicha reforma se entiende en virtud de que no se ordenó que el nuevo órgano garante de transparencia funcionara desde el momento mismo en que entrara en vigor el decreto impugnado, pues si se atiende al régimen transitorio se advierte que se ordenó expedir una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro del plazo de sesenta días naturales posteriores a la publicación de este Decreto, para que en concordancia con la iniciativa de reformas al apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se determinara lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del encargo, requisitos, procedimientos de

selección de los Comisionados, el proceso de entrega recepción de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales al Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, entre otras cosas.

154. De ahí que este Alto Tribunal considera que, contrario a lo señalado por el Instituto actor, el Congreso del Estado no se encontraba obligado a prever una ampliación presupuestal en la reforma de la Constitución del Estado de Oaxaca que se impugna.
155. Lo que se corrobora con el hecho de que el nombramiento de los nuevos comisionados del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, derivados de la reforma al artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, **se efectuó con fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno** en sesión correspondiente al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del tercer año del Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca por medio de los Decretos números 2890, 2891, 2892, 2893 y 2894, y con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, mediante la Primera Sesión Solemne, que fue instalado e inició sus funciones el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca²², tal y como se advierte de lo siguiente:

²² <https://ogaipoaxaca.org.mx/site/descargas/acuerdos/OGAIP-CG-001-2021.pdf>

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 91/2021

Órgano Garante de Acceso a la Información Pública,
Transparencia, Protección de Datos Personales y
Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Almendres 122, Colonia Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050
01 (52) 915 1100 | 915 2231
info@ogaipo.org.mx

ACUERDO OGAIP/CG/001/2021 QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PARA LA PUBLICACIÓN OFICIAL Y COMUNICACIÓN DE LA INSTALACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LA ENTIDAD.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 88, 89, 93 fracción I, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca y los Nombramientos emitidos por la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante los Decretos números 2890, 2891, 2892, 2893 y 2894, fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se:-----

-----A C U E R D A-----
Primero: Se hace del conocimiento de las autoridades federales, estatales y municipales de la entidad y del público en general que con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno mediante la Primera Sesión Solemne, fue instalado e inicio sus funciones el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual está integrado por la Comisionada Licda. Xochitl Elizabeth Méndez Sánchez; la Comisionada Licda. María Tanivet Ramos Reyes; la Comisionada Licda. Claudia Ivette Soto Pineda; el Comisionado Lic. Josué Solana Salmoran y el Comisionado Presidente Mtro. José Luis Echeverría Morales.

SEGUNDO: Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Así lo acordaron quienes integran el Consejo General el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, asistidos por la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca a veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Conste.

MTRO. JOSÉ LUIS ECHEVERRÍA MORALES
COMISIONADO PRESIDENTE

LICDA. CLAUDIA IVETTE SOTO PINEDA
COMISIONADA

LICDA. MARÍA TANIVET RAMOS REYES
COMISIONADA

LICDA. XOCHITL ELIZABETH MÉNDEZ SÁNCHEZ
COMISIONADA

LIC. JOSUÉ SOLANA SALMORAN
COMISIONADO

LIC. GUADALUPE GUSTAVO DÍAZ ALTAMIRANO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

"VOTO AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD,
POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 COVID-19"

156. Asimismo, con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, emitió el Acuerdo²³, para el proceso de entrega recepción de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales al Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca.
157. Aunado a ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados

²³ <https://ogaipoaxaca.org.mx/site/descargas/acuerdos/OGAIP-002-2021.pdf>

Unidos Mexicanos; 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 37, y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 93, fracción I, inciso C, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, el Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, emitió el Acuerdo número OGAIPO/CG/012/2021²⁴, con fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual aprobó su estructura orgánica, e Instruyó al Director de Administración de ese Órgano para solicitar a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, los recursos financieros necesarios para el óptimo funcionamiento de ese órgano por lo que restaba del ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, y dos mil veintidós.

158. Así, se estima no existe una afectación en los términos aducidos por el actor, y debe declararse **infundado** el tercer concepto de invalidez

II.IV. Violación al diseño constitucional del artículo 6° constitucional.

159. El instituto actor sostiene que el Decreto impugnado viola el diseño constitucional de los órganos garantes estatales del cumplimiento de sus obligaciones, previsto en el artículo 6° de la Constitución General, toda vez que dota al nuevo órgano garante de forma infundada de competencia para *“garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno”*, lo cual incide negativamente en su funcionamiento especializado y en el desahogo de sus procedimientos, poniendo en inminente riesgo el cumplimiento de su finalidad constitucional.

²⁴ <https://ogaipoaxaca.org.mx/site/descargas/acuerdos/OGAIPO-CG-012-2021.pdf>

160. Manifiesta que el fin último para el que fueron creados los órganos garantes en materia de transparencia fue el de tutelar el acceso a la información pública gubernamental garantizando así el derecho fundamental de acceso a la misma y no el de “garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno”, por lo que se sostiene que se ha incurrido en un exceso por parte del Legislador al poner cargas violatorias del artículo 6° constitucional en relación con los diversos 1, 3, 7, 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-T; 76, fracción XII; 89, fracción XIX; 116; y 122 de la Carta Magna de nuestro país.
161. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de invalidez propuestos conviene tener en cuenta los parámetros de regularidad constitucional previamente expuestos en esta ejecutoria, en donde se estableció que las legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos tanto en la Constitución Federal como en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero a la vez tienen libertad para ampliarlos o precisarlos atendiendo a su realidad, siempre y cuando respeten dichos mínimos, bases y principios, y lo legislado localmente se relacione con su específico ámbito de competencia.
162. Luego, a fin de determinar si la norma impugnada contraviene el orden constitucional, debe analizarse si ésta resulta acorde con el diseño institucional homogéneo establecido tanto en la Constitución General como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
163. Así, se advierte que por lo que hace al argumento que plantea el promovente en el sentido de que el Decreto impugnado viola el diseño constitucional de los órganos garantes estatales del cumplimiento de sus obligaciones, previsto en el artículo 6° de la Constitución General, toda vez que dota al nuevo órgano garante de forma infundada de competencia para “*garantizar la observancia de las normas y principios de buen gobierno*”, lo cual incide negativamente en su funcionamiento especializado y en el desahogo de sus procedimientos, poniendo en inminente riesgo el cumplimiento de su finalidad constitucional, resulta **infundado** en atención a lo siguiente:

164. Como se precisó anteriormente, el legislador local cuenta con libertad de configuración para legislar e instituir un órgano garante de transparencia y protección de datos personales en el ámbito local, que garantice el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, **siempre y cuando cumpla con las reglas, principios, bases, procedimientos y en general los mecanismos en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública permitiendo, que se prevén constitucionalmente y en la Ley General de la materia, permitiéndole adecuarla a su realidad social e incluso, perfeccionarla o ampliarla, siempre y cuando esas modificaciones, atiendan al sistema nacional implementado.**

165. Al respecto, es necesario tener presente lo señalado en la exposición de motivos que dio origen al Decreto impugnado:

***CUARTO: PROPUESTA ESPECÍFICA.** Se plantea reformar el Apartado C del Artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para crear al nuevo órgano al que proponemos denominar “Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno”, con naturaleza jurídica asignada a los órganos autónomos del Estado; en sustitución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a efecto de contar con un nuevo órgano que responda a las exigencias de la sociedad, como una de los órganos clave en la transparencia y combate a la corrupción, así como vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas de buen gobierno planteadas en ésta iniciativa.*

En ésta iniciativa de reformas, en lo específico se plantea lo siguiente:

COMISION PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

- a) *Instituir al nuevo "Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno"; en sustitución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.*
- b) *Dotar al nuevo Órgano Garante Local de facultades adicionales respecto de las establecidas en la Ley General para los organismos garantes de las*
- c) *Entidades Federativas; en particular, se propone que éste nuevo órgano sea el encargado de vigilar que los sujetos obligados cumplan con las "normas de buen gobierno que establezca y les obligue la ley local".*
- d) *Se incluyen principios adicionales sobre los que el nuevo Órgano Garante, debe regir sus actos. En consecuencia, además de los principios establecidos en la Ley General y en la Local, se plantea agregar los siguientes principios de buena fe, no discriminación, oportunidad, responsabilidad, gratuidad y buen gobierno.*
- e) *En la integración del nuevo Órgano Garante Local, se propone crear un Consejo General, el cual estará integrado por un Comisionado Presidente, quien presidirá el Consejo, y seis Comisionados ciudadanos, electos por las dos terceras partes de los Diputados presentes del Congreso del Estado, bajo el principio de renovación escalonada. La duración en el cargo de cada comisionado será de 7 años, sin derecho a reelección.*
- f) *Se plantea que en la remuneración de los comisionados se observe el principio de austeridad.*

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

NUEVO "ÓRGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO".

Las inercias globales sobre el derecho de acceso a la información, la necesidad de contar con entes públicos transparentes, y proteger los datos personales, sugieren fortalecer el marco normativo para mejorar los procesos democráticos en cada país, y a su vez disminuir los lastres mundiales como son la corrupción y el autoritarismo.

Ante ello y desde la perspectiva del DERECHO COMPARADO, a pesar de que la legislación mexicana está catalogada como la más avanzada del mundo en materia de transparencia y acceso a la información pública, los resultados en su aplicación no reflejan dicho avance, pues se supone que uno de los objetivos de la ley es incidir en la disminución de la corrupción mediante la publicidad de la información clave para que la ciudadanía tenga la posibilidad de cuestionar a sus gobernantes respecto de sus funciones públicas y sus resultados, contribuyendo con ello a disminuir a su vez con los altísimos niveles de opacidad existente.

Sin embargo, a pesar de ello, México sigue colocado dentro de los 28 países más corruptos del mundo, según datos de Transparencia Internacional, conforme a lo reflejado en la siguiente tabla:

[...]

De acuerdo a Transparencia Internacional, en 2018, México obtuvo una calificación de 28 puntos, colocándose en el lugar 138 de una lista de 180 países. Eso significó una caída de tres lugares respecto del año anterior (2017) y coloca a México como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y del G-20 junto con Rusia, lo cual se corrobora en la siguiente tabla:

Índice de Percepción de la Corrupción 2018 Transparencia Mexicana Resultados del IPC 2018 en países pertenecientes al G20 ¹		
País	Calificación en el IPC	Posición Global
Canadá	81	9
Alemania	80	11
Reino Unido	80	11
Australia	77	13
Japón	73	18
Francia	72	21
EEUU	71	22
Corea del Sur	57	45
Italia	52	53
Arabia Saudita	49	58
Sudáfrica	48	73
India	41	78
Turquía	41	78
Argentina	40	85
China	39	87
Indonesia	38	89
Brasil	35	105
NUEVA ZELANDA		
Rusia	28	138

Fuente: Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional (2019). Índice de Percepción de la Corrupción 2018, en: www.tm.org.mx/ipc2018
NOTA: El G20 está conformado por 19 países y la Unión Europea. Para el Índice de Percepción de la Corrupción, sólo los 19 países del G20 son considerados.

Los países que lideraron el ranking de 2018 porque en ellos hay una menor percepción de corrupción son Dinamarca, en primer lugar y Nueva Zelanda y Finlandia en segundo y tercero, respectivamente.

[...]

Al respecto consideramos que el derecho de acceso a la información, la transparencia, la protección de datos personales, encuentran un punto de avance sustancial con la incorporación de las normas de buen gobierno las cuáles van más allá de las obligaciones de rendición de cuentas.

Los principios y normas de buen gobierno, engloban aspectos que los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno deben observar, siendo por lo menos los siguientes:

- a) Rendir cuentas a la ciudadanía, en forma periódica de conformidad con la normatividad vigente.*
- b) Informar periódicamente a la ciudadanía de las acciones realizadas en su beneficio.*
- c) Evitar el nepotismo en la función pública.*
- d) No utilizar los recursos públicos para los fines personales o de grupo.*
- e) Pugnar siempre por la aplicación de la justicia, estableciendo mecanismos institucionales a su alcance para erradicar la impunidad.*
- f) Ejercer la función pública bajo los criterios de austeridad, eficiencia, eficacia y efectividad.*
- g) Actuación con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.*
- h) Observancia y respeto del principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.*
- i) Ejercer la función pública asegurando un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.*
- j) Actuación con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones, e igual que fomentar la calidad en la prestación de servicios públicos.*
- k) En el ejercicio de su función, mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección.*
- l) Asumir la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigible legalmente.*
- m) Desempeñar la función pública con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de interés.*
- n) Guardar la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.*
- o) Poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.*
- p) Ejercer los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.*
- q) No se implicar en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.*
- r) No aceptar para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.*

- s) *Desempeñar sus funciones con transparencia.*
- t) *Gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos, que no deben ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.*
- u) *No utilizar de su posición en la Administración Pública para obtener ventajas personales o materiales, entre otras.*

En tal sentido, consideramos que los principios y normas de buen gobierno deben incorporarse en la legislación local, así como establecer mecanismos institucionales para su observancia.

En consecuencia, del análisis realizado a la legislación nacional y local, se concluye que no existe regulación específica respecto de la obligatoriedad de los referidos principios y normas de buen gobierno, es por ello que consideramos necesario que éstos se incorporen en la legislación local vigente.

En razón de lo anterior, resulta necesario plantear la creación del nuevo Órgano Garante de Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, el cual será un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública, vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia, protección de datos personales y los principios y normas de buen gobierno.

Dicha propuesta, resulta viable desde el punto de vista jurídico, puesto que la legislación constitucional y general establece el derecho de libre configuración de las Entidades Federativas respecto de la denominación de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información pública.

De igual forma la referida legislación, establece la facultad de legislar en el ámbito local, respecto de las facultades en la materia, en lógica de la de la progresividad de los derechos humanos, al establecer en la ley general lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información:

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renunciaciones, licencias y suplencias de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente Capítulo.

Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I a la XXI. (...)

XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

De ahí que la legislación general deja en la libertad a las Entidades Federativas de instituir a los organismos garantes locales en materia de transparencia, y establecer, en lo que corresponda, sobre las facultades residuales en la materia. De ahí de la viabilidad de la propuesta que en ésta iniciativa hacemos.

PRINCIPIOS ADICIONALES QUE DEBE OBSERVAR EL NUEVO ÓRGANO GARANTE DE TRANSPARENCIA (BUENA FE, NO DISCRIMINACIÓN, OPORTUNIDAD, RESPONSABILIDAD, GRATUIDAD Y BUEN GOBIERNO).

De igual forma la referida legislación, establece la facultad de legislar en el ámbito local, respecto de las facultades en la materia, en lógica de la de la progresividad de los derechos humanos, al establecer en la ley general lo siguiente:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información:

Artículo 37. Los Organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se determinará lo relativo a la estructura y funciones de los Organismos garantes, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimiento de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renunciaciones, licencias y suplencias de los integrantes de dichos Organismos garantes, de conformidad con lo señalado en el presente Capítulo.

Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I a la XXI. (...)

XXII. Las demás que les confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables.

De ahí que la legislación general deja en la libertad a las Entidades Federativas de instituir a los organismos garantes locales en materia de transparencia, y establecer, en lo que corresponda, sobre las facultades residuales en la materia. De ahí de la viabilidad de la propuesta que en ésta iniciativa hacemos.

166. Al respecto, la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales en su Dictamen a la citada iniciativa señaló lo siguiente:

QUINTO. – Por otra parte, esta comisión de estudios constitucionales comparte plenamente con los argumentos de las y los Diputados promoventes, respecto de adicionar al texto constitucional lo referente al "Buen Gobierno", toda vez que, está vinculado al ejercicio de un gobierno transparente, abierto a la ciudadanía, a la rendición de cuentas, que se traduce en una fórmula directa para prevenir la corrupción y la eliminación de los vicios que ésta conlleva los cuáles son el nepotismo, la opacidad y la impunidad.

En consecuencia, si bien en cada dependencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Municipios y los órganos autónomos (que son sujetos obligados), se encuentran instaurados los Órganos Internos de Control, encargados de conocer y sustanciar las faltas administrativas **no graves**, conforme a lo establecido en el diseño del nuevo Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, también lo es que dichos procedimientos administrativos tienen alcances limitados que impactan en la mayoría de los casos en el principio de independencia de las determinaciones que toman al sustanciar y resolver sobre los referidos procedimientos administrativos, puesto que los titulares de los Órganos Internos de Control son designados por los titulares de las instancias a las que pertenecen, generándose una relación de gratuidad, lealtad y obediencia.

Además, los referidos procedimientos administrativos sustanciados ante los Órganos internos de Control de los sujetos obligados actualmente no tienen alcances jurídicos para prevenir, combatir y erradicar algunos vicios que impactan en el derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales,

y fomentar la corrupción como son las prácticas autoritarias, el nepotismo, el clientelismo y la impunidad. Luego entonces, las normas y principios de buen gobierno tienden a tener sus alcances en la prevención y atención de dichos problemas sociales.

Por tal motivo, las normas y principios de Buen Gobierno como parte de las facultades del nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información, serán orientadas a vigilar que los sujetos obligados eliminen las prácticas de opacidad, nepotismo, autoritarismo, falta de rendición de cuentas a la ciudadanía, etc., en el ejercicio de la función pública; sin que éstas facultades subyuguen o mermen las facultades de las instancias integrantes del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, puesto que las nuevas facultades de vigilancia del Órgano Garante estarán vinculadas a verificar y por lo tanto, exigir formalmente que las referidas instancias, así como la totalidad de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, sujeten su actuar a las prácticas de Buen Gobierno, sin que el citado Órgano Garante tenga facultades de entrometerse en la sustanciación o resolución de los procedimientos relativos a las faltas administrativas graves y no graves.

De ésta manera, se estarán fortaleciendo las facultades del nuevo Órgano Garante, puesto ahora no sólo será el "salvaguarda" de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, sino que además vigilará que los sujetos obligados sujeten su actuar a la Constitución, a la Ley, y a los principios de buen gobierno vinculados al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales y a las obligaciones de transparencia en el ejercicio de la función pública. Es por ello que esta comisión dictaminadora coincide plenamente en los planteamientos hechos por las y los diputados promoventes de la iniciativa en análisis.

En ese tenor, las y los Diputados integrantes de ésta comisión dictaminadora, en un análisis integral y pormenorizado a la legislación nacional y estatal, así como lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Federal, coinciden en que a la propuesta original contenida en la iniciativa planteada por los promoventes, resulta técnicamente viable modificar la denominación del nuevo ente de Transparencia Local, quedando como: **"Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno"** el cual sustituirá al actual Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

167. De lo anterior se advierte que al adicionar al texto constitucional lo referente al "Buen Gobierno", no se viola el diseño constitucional de los órganos garantes estatales del cumplimiento de sus obligaciones, previsto en el artículo 6º de la Constitución General, pues dicha adición

no se contrapone a los parámetros constitucionales precisados anteriormente ya que como se advierte en la exposición de motivos que dio lugar a la citada reforma, su objetivo es alcanzar el adecuado funcionamiento del gobierno en el cumplimiento de sus objetivos.

168. Si bien dicho principio de buen gobierno no está previsto expresamente en la Constitución Federal como aquellos con los que se debe cumplir, ello no impide que en ejercicio de su libertad configurativa el Congreso del Estado pueda establecerlo, aún más cuando de los objetivos de dicha reforma se advierte que su obligatoriedad no es incompatible los principios y reglas ya establecidos para los órganos garantes.
169. Así derivado de lo anterior, lo procedente es desestimar el argumento planteado.

II.V. Incertidumbre e inseguridad jurídica por antinomia.

170. El instituto actor sostiene que existe una antinomia entre el artículo 114 y el diverso 120, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pues mientras el artículo 114 extingue al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el artículo 120 lo contempla como órgano garante e integrante del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca a través de su titular, lo cual representa un problema de eficacia y de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico constitucional del Estado de Oaxaca.
171. Refiere que no debe pasar inadvertido que el apartado Transitorio del Decreto 2495, se ordena: *“SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan del presente Decreto”*.

172. En este sentido, señala que obedecer a tal mandato resulta evidentemente confuso, ya que la reforma tanto al artículo 114 como al 120 constitucionales, gozan de igual jerarquía dentro de la Constitución del Estado de Oaxaca.
173. Advierte que surge una falta de certidumbre y seguridad jurídica con respecto a la subsunción del nuevo artículo 114, a la reforma del artículo 120, en el sentido de quedar abrogada dicha reforma por acción del mandato expreso transitorio SEGUNDO del Decreto 2495.
174. Insiste en que surge incertidumbre e inseguridad jurídica respecto de si el nuevo apartado C del artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca habría sido derogado por el Decreto 2495 reforma la fracción LXIX del artículo 59 así como fracciones I y II, el inciso e) de la fracción III y los párrafos segundo y tercero del artículo 120 de la misma Constitución, publicado el primero de junio de dos mil veintiuno, en cuanto que en la fracción I del artículo 120 establece que el Sistema Estatal de Combate a la corrupción estará integrado, entre otros, por el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, estableciéndose en el artículo SEGUNDO transitorio que se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se opongan a dicho decreto.
175. Aduce que esto es así porque al extinguirse el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, como actualmente existe y crearse el diverso Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, además con una estructura lógica diferente, se contrapone a lo mandado por la reforma al artículo 120, en el sentido de que al ser un ente diverso, no se estipula que forme parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción del

Estado de Oaxaca, ni que lo haga a través de la integración del Comité Coordinador por conducto de su titular, creando otro vacío más en la normatividad estatal en materia de transparencia, combate a la corrupción y acceso a la información pública gubernamental, por tanto, al obedecer el SEGUNDO Transitorio del Decreto 2495, quedaría abrogada la reforma del artículo 114 constitucional en su apartado C, devolviendo el artículo 114 al estado en que se encontraba antes de la misma, esto necesariamente tendría que ser así, ya que hasta antes de la reforma se encontraría vigente el actual Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, generándose así la concordancia constitucional que debe imperar en el sistema normativo y jurídico del Estado de Oaxaca.

176. Para dar respuesta a los anteriores argumentos, es necesario recordar que la existencia de incongruencias o antinomias se comprueba cuando se descubre que un mismo hecho ha sido objeto de una regulación contradictoria.
177. Se ha considerado que para sostener que dos normas regulan contradictoriamente un hecho, no basta, naturalmente, que cada una le atribuya consecuencias jurídicas distintas. La simple discrepancia de sus partes dispositivas no implica contradicción. Es cierto que las disposiciones que se contradicen son discrepantes, pero su discrepancia es *sui generis*, ya que una de ellas prohíbe la misma conducta permitida por la otra.
178. Tomando en consideración lo anterior, resulta infundada la antinomia de la que se duele el Instituto actor, y para demostrarlo resulta necesario precisar lo que establece el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca:

*“**Artículo 120.** El Sistema Estatal de Combate a la Corrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:*

*I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; **Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca**, así como un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana;*
[...]”

179. En el caso este Tribunal Pleno advierte que si bien como se desprende de la anterior transcripción, el citado artículo 120, en una clara omisión del Congreso de ajustar la nueva denominación que se le dio al organismo garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales, mediante Decreto 2473, por el cual reformó el artículo 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, de fecha primero de junio de dos mil veintiuno, como: “*Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca*”, aún contempla como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción al **Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca**, de una interpretación sistemática de los citados preceptos se puede advertir que ambos preceptos se refieren al organismo garante especializado en materia de información y protección de datos personales del Estado de Oaxaca, actualmente denominado: Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección

de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, sin que como lo sostiene el actor exista la inseguridad alegada.

180. En efecto, no puede afirmarse que exista una antinomia entre los artículos 120 y 114 ambos de la Constitución estatal, pues no regulan contradictoriamente un hecho, sino que únicamente no se ha ajustado en el artículo 120, la denominación del órgano garante conforme a la denominación aprobada en el decreto que reformó el artículo 114, apartado C, de la propia Constitución estatal.
181. Incluso, cabe señalar que en el propio artículo 114, apartado C, párrafo sexto, fracción VIII, de la Constitución local, prevé como atribución del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, tal como advierte de lo siguiente:

“Artículo 114.

[...]

C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca contará con las siguientes atribuciones:

[...]

VIII. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

[...]”

182. Asimismo, la actual Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, prevé en su artículo 86, lo siguiente:

“Artículo 86. El titular del Órgano Garante, integrará las siguientes instancias:

I. El Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; [...].”

183. Por tanto, es claro que el artículo 120 de la Constitución estatal, debe interpretarse en el sentido de que se refiere al órgano garante del Estado, independientemente del nombre que se le asigne.
184. Por otra parte, el Instituto actor manifiesta que existe una antinomia entre el artículo 114, inciso C, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y el diverso 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, que crea discordancia tanto para el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como para la ciudadanía Oaxaqueña, por violación al artículo 6º constitucional por cuanto hace al derecho fundamental de acceso a la información.
185. Al respecto, este Tribunal Pleno estima que dicho argumento debe desestimarse, pues con posterioridad a la interposición de la demanda, el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, respecto de la cual se señala una posible antinomia, ya no existe, pues la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca, fue abrogada con fecha cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, al emitirse la nueva Ley, tal como se advierte del artículo Segundo de las disposiciones transitorias, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el No. 36 del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado cuatro de septiembre de dos mil veintiuno:

“SEGUNDO. Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, aprobada mediante el Decreto número 1690, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 11 de marzo de 2016.”

186. Así dada la inexistencia de la norma, respecto de la que alude existe antinomia, lo procedente es desestimar el argumento planteado.

VIII. DECISIÓN.

187. Por lo antes expuesto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se reconoce la validez del “Decreto número 2473, por el que se reforma la denominación del apartado C; los párrafos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo; las fracciones IV, V y VIII, todos del apartado C del artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el apartado VII de esta decisión.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado de antecedentes y trámite de la demanda, así como los diversos I, II, III, IV y V, relativos, respectivamente a la competencia, a la precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas, a la oportunidad, a la legitimación activa y a la legitimación pasiva.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VI, relativo a las causas de improcedencia, consistente en desestimar y declarar infundadas las causas de improcedencia aducidas. La señora Ministra Esquivel Mossa anunció voto aclaratorio.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema I, denominado “Violaciones al proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado”, consistente en declarar infundados los argumentos analizados.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema II, subtema II.I, denominado “Parámetros a los que deben sujetarse las entidades federativas en la creación de los órganos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”. El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea votó en contra.

Se aprobó por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa apartándose de los párrafos del 140 al 144, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea y Ríos Farjat, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema II, subtema II.II, denominado “Omisión de establecer un régimen transitorio”, consistente en declarar infundado el argumento analizado. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Laynez Potisek y Pérez Dayán, así como la señora Ministra Presidenta Piña Hernández votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema II, subtema II.III, denominado “Violación al gasto público”, consistente en declarar infundado el argumento analizado.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara

Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, separándose de algunas consideraciones, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema II, subtema II.IV, denominado “Violación al diseño constitucional del artículo 6° constitucional”, consistente en declarar infundado el argumento analizado.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto del apartado VII, relativo al estudio de fondo en su tema II, subtema II.V, denominado “Incertidumbre e inseguridad jurídica por antinomia”, consistente en declarar infundado el argumento analizado.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.

La señora Ministra Loretta Ortiz Ahlf no asistió a la sesión por gozar de vacaciones al haber integrado la comisión de receso correspondiente al primer periodo de sesiones de dos mil veintidós.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

PRESIDENTA

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

PONENTE

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

Esta foja corresponde a la sentencia de la **controversia constitucional 91/2021**. **Promoviente:** Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. Fallado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del trece de abril de dos mil veintitrés. **Conste.**